



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

4^a REUNIÓN – 1^a SESIÓN ESPECIAL

25 DE ABRIL DE 2018

Presidencia de la señora vicepresidente de la Nación, licenciada **MARTA GABRIELA MICHETTI**,
del señor presidente provisional del Honorable Senado,
don **FEDERICO PINEDO**,
y del señor vicepresidente del Honorable Senado, don **OMAR ÁNGEL PEROTTI**

Secretarios:

Señor don **JUAN PEDRO TUNESSI** y señor don **HELIO REBOT**

Prosecretarios:

Señor don **MARIO DANIELE**, señor don **ERIC CALCAGNO Y MAILLMANN**
y señor don **ÁNGEL TORRES**



PRESENTES:

AGUILAR, Eduardo Alberto
 ALMIRÓN, Ana Claudia
 BASUALDO, Roberto Gustavo
 BLAS, Inés Imelda
 BOYADJIAN, Miriam Ruth
 BRAILLARD POCCARD, Néstor Pedro
 BRIZUELA y DORIA DE CARA, Olga Inés
 BULLRICH, Esteban José
 CASERIO, Carlos Alberto
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 CATALÁN MAGNI, Julio César
 CATALFAMO, María Eugenia
 CLOSS, Maurice Fabián
 COBOS, Julio César Cleto
 CREXELL, Lucila
 DE ANGELI, Alfredo Luis
 ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz
 ESPINOLA, Carlos Mauricio
 FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina
 FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
 FIAD, Mario Raymundo
 FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle
 FUENTES, Marcelo Jorge
 GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
 GONZÁLEZ, Gladys Esther
 GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
 GONZÁLEZ, Nancy Susana
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
 IANNI, Ana María
 ITÚRREZ DE CAPELLINI, Ada R. del Valle
 KUNATH, Sigrid Elisabeth
 LÓPEZ VALVERDE, Cristina del Carmen
 LOVERA, Daniel Aníbal
 LUENZO, Alfredo Héctor
 MARINO, Juan Carlos
 MARTÍNEZ, Ernesto Félix
 MARTÍNEZ, Julio César

MAYANS, José Miguel Ángel
 MENEM, Carlos Saúl
 MERA, Dalmacio Enrique
 MIRKIN, Beatriz Graciela
 ODARDA, María Magdalena
 OJEDA, José Antonio
 PAIS, Juan Mario
 PEREYRA, Guillermo Juan
 PEROTTI, Omar Ángel
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PILATTI VERGARA, María Inés
 PINEDO, Federico
 POGGI, Claudio Javier
 PORCEL DE RICCOBELLI, Blanca
 REUTEMANN, Carlos Alberto
 RODRÍGUEZ MACHADO, Laura
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
 ROZAS, Ángel
 SACNUN, María de los Ángeles
 SCHIAVONI, Humberto Luis Arturo
 SNOPEK, Guillermo Eugenio Mario
 SOLANAS, Fernando Ezequiel
 SOLARI QUINTANA, Magdalena
 TAPIA, María Belén
 URTUBEY, Rodolfo Julio
 VARELA, Marta Lucía
 VERASAY, Pamela Fernanda

AUSENTES, CON AVISO:

ALPEROVICH, José Jorge
 COSTA, Eduardo Raúl
 DURANGO, Norma Haydeé
 GIACOPPO, Silvia del Rosario
 MONTENEGRO, Gerardo Antenor
 ROMERO, Juan Carlos
 UÑAC, José Rubén

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 3.)
2. Himno Nacional Argentino. (Pág. 3.)
3. Homenaje por el 103° aniversario del genocidio armenio. (Pág. 3.)
4. Convocatoria a sesión especial. (Pág. 3.)
5. Asuntos entrados. (Pág. 3.)
6. Mensajes del Poder Ejecutivo por los cuales solicita acuerdos. (Pág. 4.)
7. Manifestaciones. (Pág. 4.)
8. Régimen de subrogancias para la justicia nacional y federal. (O.D. N° 33/18.). (Pág. 5.)

9. Modificación del Código Procesal Penal de la Nación. (O.D. N° 35/18 y anexo.). (Pág. 19.)

10. Modificación del plan de labor. (Pág. 59.)

11. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley. (Pág. 59.)

Cesión de la jurisdicción efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional para la creación del Parque Nacional Aconquija. (O.D. N° 16/18.)

Regulación a la actividad deportiva y comercial del vuelo libre, efectuado con parapentes y/o aladeltas. (O.D. N° 76/18.)

Declaración de la rodocrosita como piedra nacional argentina. (O.D. N° 82/18.)

Emisión de un sello postal conmemorativo del centenario de la Reforma Universitaria de 1918. (O.D. N° 96/18.)

Institución al año 2019 como Año del Centenario de la Creación de la Organización Internacional del Trabajo. (O.D. N° 97/18.)

Recomendación al Banco Central para la acuñación y puesta en circulación de una moneda de curso legal vigente de diez pesos. (O.D. N° 100/18.)

60° aniversario del Conicet. (S.-1.299/18.)

12. **Moción de cuarto intermedio.** (Pág. 64.)

13. **Apéndice.** (Pág. 65.)

I. **Convocatoria a sesión especial.** (Pág. 65.)

II. **Actas de votación.** (Pág. 67.)

III. **Asuntos entrados.** (Pág. 84.)

IV. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 218.)

V. **Inserciones.** (Pág. 316.)

— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 y 39 del miércoles 25 de abril de 2018:

Sra. Presidente. — La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente. — Invito al señor senador por San Juan, don Roberto Basualdo, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

— Puestos de pie los presentes, el señor senador Basualdo procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Presidente. — A continuación se van a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

— Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. (*Aplausos.*)

3

HOMENAJE POR EL 103° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Sra. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Boyadjian.

Sra. Boyadjian. — Señora presidente: muchas gracias.

El 24 de abril fue declarado, en virtud de la ley 26.199, Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio. Ayer se cumplieron 103 años de este hecho que ha causado una herida muy grande en la humanidad. Yo solicito que desde este recinto y para honrar a los mártires, podamos tener un minuto de silencio como símbolo del valor de la vida y la dignidad de las personas, más allá de las creencias y de los pensamientos.

Sra. Presidente. — Cómo no, senadora.

Nos vamos a poner de pie para hacer un minuto de silencio por el hecho manifestado por la senadora.

— Puestos de pie, los presentes proceden a guardar un minuto de silencio.

4

CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sra. Presidente. — Se incorporarán al Diario de Sesiones las notas de varios senadores y senadoras mediante las que solicitaron la convocatoria a esta sesión especial y los respectivos decretos dictados por esta Presidencia.¹

5

ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento del Honorable Senado, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.²

Asimismo, corresponde aprobar los retiros de proyectos solicitados por los señores y señoras senadoras que obran en la lista de asuntos entrados.

Se va a votar a mano alzada.

— Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. — Aprobado.

1 Ver el Apéndice.

2 Ver el Apéndice.

Sra. Presidente. – Senador Naidenoff, a mí me queda hacer votar su moción. Si usted quiere, la votamos.

Sr. Petcoff Naidenoff. – No, perfecto. Sólo una aclaración. No hay cambio de pelota. Solamente es una posición nuestra que abordamos como...

Sra. Presidente. – En el discurso de los tres temas juntos.

Sr. Petcoff Naidenoff. – ...El dictamen en un esquema global.

Sra. Presidente. – Sí. Es clarísimo. Y siguen los tres temas por separado en tratamiento. Perfecto, perfecto.

Sr. Pichetto. – Se votan por separado.

Sra. Presidente. – Sí, se vota y se habla por separado, pero en el discurso inicial del bloque oficialista van a estar los tres temas, nada más.

Sí, senador Fuentes, de nuevo.

Sr. Fuentes. – Primero el senador, por favor.

Sra. Presidente. – Senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – Dejemos las cosas claras. Son tres leyes y las tres se van a tratar por separado.

Sra. Presidente. – Sí, separado. Exacto.

Sr. Rodríguez Saá. – Si en la segunda ley o tercera ley el bloque oficialista no quiere hablar, que no lo haga.

Sra. Presidente. – Exactamente.

Sr. Rodríguez Saá. – Y si en la primera ley quiere hablar de todo, habla de todo, tiene todo su derecho.

Sra. Presidente. – Es lo que dijo el senador Pinedo.

Sr. Rodríguez Saá. – Pero vamos a tratar los tres temas por separados, con tres miembros informantes, uno en cada tema, y con cierre de debate en cada tema.

Sra. Presidente. – Perfecto, senador. Así será. ¿Estamos todos de acuerdo?

Senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Sí, quiero aclarar que no era un capricho, simplemente que la propuesta inicial que se hizo era otra.

Ahora, retomando esto, si quiere hacer eso el bloque, me parece perfecto, nosotros vamos a estar conforme a lo que acordamos en labor parlamentaria.

Sra. Presidente. – Perfecto, senador Fuentes. El secretario parlamentario va a mencionar el tema.

8

RÉGIMEN DE SUBROGANCIAS PARA LA JUSTICIA NACIONAL Y FEDERAL (O.D. N°33/18)

Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata del Orden del Día N° 33/18, que se imprimió el 11 de abril de 2018. Es un dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley venido en revisión por el que se establece un régimen de subrogancias para la justicia nacional y federal. Expediente C.D.-69/17.

Sra. Presidente. – ¿Quién será el miembro informante?

Sí, senador Guastavino.

Sr. Guastavino. – Gracias, presidenta.

Sra. Presidente. – Perdón, vamos a hacer una cosa. Se van anotando para la lista de oradores y luego de su discurso vamos a hacer el cierre.

Senador Guastavino.

Sr. Guastavino. – Gracias, presidenta.

Bueno, efectivamente, como lo manifestaba el secretario parlamentario, este es un proyecto de ley que viene con sanción de la Cámara de Diputados. Es un proyecto de subrogancias que Diputados votó el 22 de noviembre de 2017.

Todos sabemos que la subrogancia significa el reemplazo de un juez de tribunales inferiores a la Corte que, debido a una causa temporal, no puede seguir en el uso del ejercicio de su cargo. La ley que rige esta clase de situaciones es la 27.145, sancionada por el Congreso Nacional en junio de 2015.

Sin embargo, el 4 de noviembre del mismo año, en la causa “Uriarte”, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, declaró la inconstitucionalidad de la ley 27.145 porque afectaba –así lo decía la Corte– la independencia judicial y la garantía de juez natural para los ciudadanos, en tanto permitía al Consejo de la Magistratura elegir subrogantes para un tribunal o caso determinado en forma discrecional, sin sorteo ni parámetro objetivo algunos y sin dar prioridad a los jueces designados mediante el proceso constitucional.

Además, la ley también establecía que los jueces subrogantes podían nombrarse con una mayoría inferior a la requerida en estos casos, que es la mayoría de dos tercios. La ley en ese entonces hablaba de una mayoría absoluta y no de dos tercios, que también cuestionó la Corte en su fallo de inconstitucionalidad.

Asimismo, el fallo declaró la invalidez de todas las listas de conjuces aprobadas sin la debida intervención del Consejo de la Magistratura con las mayorías agravadas de dos tercios. Y, por último, el fallo estableció que, hasta el dictado por parte del Congreso de una nueva ley, exista un procedimiento de designación del subrogante por parte del Consejo de la Magistratura, sobre cuyos lineamientos se ha elaborado este texto que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, que es el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el cual no tuvo objeciones, y es el que hoy proponemos convertir definitivamente en ley.

Brevemente, este es el fundamento. Posteriormente el proyecto de ley que está en tratamiento va desarrollando cómo debe ser la metodología para reemplazar temporalmente al juez que, por diferentes razones, ha dejado de ejercer su función. Y cuando no ha habido resolución en las propias instancias por los distintos estratos judiciales se utiliza el método del sorteo público. Con lo cual, estamos dando en este proyecto de ley un absoluto respaldo a los planteos que hizo la Corte cuando declaró la inconstitucionalidad de la ley que habíamos votado en el Congreso.

Brevemente, estos son los fundamentos de este proyecto de ley de subrogancias.

Sra. Presidente. – Muchísimas gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.

Sr. Martínez (E. F.). – Señora presidenta...

Sr. Guastavino. – Perdón, presidenta...

Sra. Presidente. – Le pide una interrupción el senador Guastavino.

Sr. Martínez (E. F.). – Cómo no.

Sr. Guastavino. – Olvidé mencionar una cosa que es importante resaltar.

Hoy el Consejo de la Magistratura obviamente está –como así lo indicaba la Corte, hasta tanto surgiera una ley en este sentido– haciendo el trabajo con listas de conjuces para ir cubriendo

cundo se plantea la necesidad de reemplazar a un juez por tiempo determinado.

Recuerdo que hace un par de semanas, aquí mismo, en la Comisión de Acuerdos, les dimos acuerdo a dos jueces subrogantes que fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura para reemplazos.

Lo que quiero decir es que, hasta tanto se implemente y reglamente la ley a la que estamos aquí dándole sanción, el Consejo de la Magistratura continuará, conforme a lo que se ha determinado, haciendo los reemplazos de los jueces que vayan generando vacantes.

Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador. Senador Martínez.

Sr. Martínez (E. F.). – Gracias, presidenta.

Atento a que en labor parlamentaria se dispuso tratar por tramos los diferentes proyectos, vamos a acompañar la brevedad del señor miembro informante, el senador por Entre Ríos, buscando la sustancia de lo que se procura. Y es que en materia de subrogancias entendemos que lo que se debe tener en cuenta –luego de idas y vueltas sobre el tema y fallos de la Corte ya mencionados por el senador Guastavino, siempre vinculados a la demora en terminar con los concursos y a la engorrosa intervención proverbial del Consejo de la Magistratura– es que con el argumento del apremio en la cobertura del despacho de un juzgado no se designen más magistrados a dedo ni se soslaye la potestad constitucional del Senado de otorgar acuerdos, aun cuando la legitimación fuera para subrogantes, lo que ya ha venido haciendo la respectiva comisión.

A este poder del Senado, de consuno por supuesto con las propuestas del Ejecutivo, luego de pasar por el Consejo de la Magistratura, se le une el concepto de sorteo público cuando no se puede integrar con conjuces de tribunales orales o de cámaras. Esto lleva indudablemente a la necesidad de llenarlos con otros jueces. Y si establecemos un sorteo público, el primer control tiene que ser de las partes interesadas en el proceso y la verificación, al ser pública, puede hacerse por cualquiera.

No desconozcamos que existe una maña argentina tan antigua como nuestro Poder Judicial que consiste en seleccionar los jueces a dedo por los tribunales superiores correspondientes.

Y desde nuestro lado se trata de conservar el poder de integración de determinados tribunales conforme lo reglamenta la Constitución, no de designar árbitros según el partido que se vaya a jugar.

Poner jueces con la mano es una de las máximas infamias en que ha incurrido...

Sra. Presidente. – Perdón. Espéreme un segundito, senador. No se le escucha. Si usted se acerca más al micrófono, creo que vamos a andar bien.

Sr. Martínez (E. F.). – O voy a hablar más fuerte, entonces. (*Risas.*)

Dije que poner jueces con la mano es una de las máximas infamias en que ha incurrido la magistratura argentina, y no por la ventaja del momento o por el magistrado con nombre y apellido o por la sala con número cantado. Es una afrenta constante, sistemática, intolerable y encubierta, además, para que no se pueda cumplir con el principio de juez natural consagrado en la Constitución Nacional.

Si tengo que afrontar una persecución que me toque, cualquiera sea, como a cualquiera le puede pasar, no quiero que quien maneja los sorteos del Poder Judicial designe el juez que me tiene que tocar. Que sea cualquiera, que sea el que corresponde, que sea el juez natural. Queremos que esto se concrete. Ese es el sentido de esta ley.

Por caso, recuerden todos las autodenuncias en determinados turnos del Poder Judicial que se hacían en las comisarias para que luego cayera en un juez específico o el reiterado sorteo o la reiterada designación del juez Oyarbide, al que parece que le gustaba el trato con los jugadores de fútbol y a ciertos imputados les gustaba, a su vez, que sus causas fueran tratadas por el doctor Oyarbide. Bueno, todo esto hay que terminarlo.

Se dijo, luego de aquella historia en cuanto a la forma de sortear, que la informática iba a barrer con esa situación. No fue así. Hoy se está investigando –por supuesto, sin ningún resultado, como es la costumbre– la mecánica de la informática en los sorteos de jueces, en las subrogancias y en aquellos que debían intervenir. Y esto no por queja de alguien, sino por internas del Poder Judicial.

La pregunta es: ¿quién puede contradecir racionalmente un sorteo electrónico? Nadie.

¿Quién puede saber cómo va a salir un sorteo electrónico? Los que lo manejan y por una razón muy sencilla. Si usted cuenta con doce jueces o dos o tres salas de una cámara federal, lo que fuera, como se van equiparando por la carga de trabajo para que sea pareja y equilibrada la asignación de las distintas causas penales, no hacen falta contadores fulleros de cartas, sino que el que va llevando la libreta con el modo en que se van asignando sabe perfectamente cómo va a salir ese sorteo.

Por eso, este sorteo público, que es el concepto esencial, a mi modo de ver, del proyecto que viene con sanción de la Cámara de Diputados, y que es motivo de las subrogancias, espero que sea reglamentado a la antigua, con un bolillero y, en el caso de Comodoro Py, con doce bolillas, atento a que hay doce jueces. Cuando se saquen bolillas, como cuando se rinden materias, que sea controlado por las partes y por cualquiera del pueblo que así lo requiera. Conocemos, incluso, que aunque pongamos un niño cantor en la Argentina, hasta eso se puede comprar.

Pero es indudablemente un principio de solución el uso del bolillero a la antigua. El concepto de público es el que fortalece la garantía constitucional del juez natural.

La enjundia que pongan las partes, la responsabilidad de los abogados, de los imputados, de los fiscales y de las querellas en que salga el juez que tiene que salir y no aquel que determinadas instancias quieran, es lo que asegurará el principio.

Nosotros les estamos dando la herramienta. Que los actores del proceso se animen a utilizarla sin temor alguno, ni reverencial ni de ningún otro tipo, frente a las necesidades de llegar al juez natural.

Los numerosos inconvenientes, entonces, derivados de listas generadas por los propios tribunales o por el Poder Ejecutivo y el antecedente del caso “Uriarte”, en definitiva, al no cumplirse y dando lugar a la sospecha, exigen ahora para superarlos el acuerdo senatorial y la previa intervención del Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo. Lo más aconsejable es la pronta cobertura de la vacante para evitar subrogancias. Pero ante la realidad de la demo-
ra, surge útil esta previsión legislativa.

Como habíamos acordado, y así lo pidió el senador por el Neuquén, este pequeño trozo de las distintas leyes en cuestión entiendo que ha sido contestado abrevando en lo que ya ha dicho el senador Guastavino, por lo que dejamos entonces tiempo para los restantes miembros del Senado.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pais.

Sr. Pais. – Gracias, presidenta. Es para expresar, en este recinto, la voluntad del legislador en un tema específico, que fue tratado muy especialmente en el ámbito de la Comisión de Justicia al momento de dar dictamen a este proyecto de ley. Y es lo que entendemos una situación de conflicto que se da entre lo prescrito por el artículo 2º de esta norma y la norma relativa al artículo 6º, en el segundo párrafo.

El artículo 2º es el que establece el principio general de la subrogancia de los jueces de primera instancia. Dice que, en caso de licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de los jueces de primera instancia, de cualquier fuero o jurisdicción, la cámara respectiva procederá a la designación de un juez subrogante dentro de los tres días de ocurrida la causa que motivara la subrogancia y de acuerdo con el siguiente orden. Establece así un orden de prelación entre los juzgados de la misma jurisdicción, de primera instancia, y luego establece las listas de conjueces establecidas y reguladas por los artículos 8º y 9º.

En el caso de la norma que regula específicamente la subrogancia de la Cámara Nacional Electoral, en el primer párrafo, dice que, en caso de licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de los cargos de la Cámara Nacional Electoral, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta se integrará, por sorteo público, con los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y, en caso de que ello no resultara posible, entre los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, ambas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acá, viene una norma que ha sido transcrita de la anterior ley 27.145. Y esta es la situación de conflicto. En caso de licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de los miembros de los tribunales inferiores, con com-

petencia electoral, la designación será realizada por la Cámara Nacional Electoral, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de unas listas de candidatos elaboradas por el Consejo de la Magistratura, conforme lo dispuesto en los artículos 8º y 9º.

Ahora bien, en el interior del país no existe ningún juzgado federal con competencia electoral exclusivamente. Tienen competencias múltiples: algunos, con competencia penal y electoral; otros, con competencia múltiple no penal y electoral. En ninguna parte del interior del país, ni en la propia Capital Federal, existe un juzgado federal con competencia electoral.

Aquí, entra en colisión y en conflicto la norma general del artículo 2º con la norma del segundo párrafo del artículo 6º. ¿Qué va a hacer un juez con competencia electoral, pero también con competencia civil, contenciosa administrativa, penal, de las provincias?

Mire: yo estuve relevando los juzgados del interior del país. El de Servini de Cubría, Juzgado N° 1 de Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el Criminal y Correccional Federal N° 1, con competencia electoral. El Juzgado Federal de Mendoza tiene competencia penal y electoral. El de Primera Instancia de Córdoba tiene competencia múltiple y electoral. El Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja tiene competencia múltiple, que incluye la electoral. El Juzgado Federal de San Luis, con asiento en la capital de la provincia de San Luis, tiene competencia múltiple, incluso la electoral. El Juzgado Federal de San Juan... Y así podemos recitar las veintitrés provincias argentinas.

Esta norma, como tal, va a plantear y plantea una situación de conflicto particular entre todos los juzgados electorales de las provincias, las cámaras federales de las jurisdicciones provinciales y la Cámara Nacional Electoral. Y ya se planteó con la declarada inconstitucional ley 27.145. Se planteó a raíz de que la Cámara Nacional Electoral dictó dos acordadas, la 78 y la 116. En la 78, del 7 de julio de 2015, la Cámara Electoral instruía a todos los jueces con competencia electoral, pero con otras múltiples competencias, a que, en caso de licencias –una cuestión casi cotidiana en la Justicia–, vacancia, suplencia o de algunos de los mecanismos previstos en la norma regulatoria primero tenían que pedir autorización; segundo, debían

comunicarlo y ella disponía la subrogancias. Esto trajo aparejado que, en diferentes jurisdicciones provinciales, las cámaras federales de esas provincias reivindicasen para sí la potestad, que también consagraba la norma. Acá hay una situación de conflicto. El 2º la asigna a las cámaras federales de las jurisdicciones provinciales y el 6º, segundo párrafo, la asigna a la Cámara Nacional Electoral.

Es más, la Cámara Nacional Electoral, en su momento, daba cuenta de que reivindicaba esta potestad, pero que justamente habían dictado diferentes tribunales colegiados federales del interior del país, como Rosario, creo, Neuquén, Comodoro Rivadavia, normas que contradecían y decían que no tenía esas facultades.

La acordada de la Cámara Nacional Electoral 116 da cuenta de que, sin perjuicio de lo normado por la ley, varias cámaras federales con asiento en el interior del país dispusieron que los jueces federales que ejercen competencia en materia electoral deberán elevar los pedidos de licencia a esos tribunales, a los tribunales colegiados de segunda instancia de las provincias, como lo venían haciendo con anterioridad a la sanción de la ley 27.145, y que la designación de los jueces subrogantes para cubrir dichas vacantes temporarias serán resueltas por ellos con comunicación a la Cámara Nacional Electoral.

A su vez, la Cámara Nacional Electoral reivindicó para sí la potestad de la 27.145, que acá reiteramos, y dispuso que corresponde hacer saber a las cámaras federales de apelaciones de Comodoro Rivadavia, General Roca, Bahía Blanca y Rosario, que eran las que habían resuelto lo contrario, que dicha situación no obsta a que se puedan adoptar otras medidas tendientes a asegurar la correcta administración de justicia y reivindicó para sí la potestad de nombrar los subrogantes.

La voluntad del legislador es esta, señora presidenta. No existen jueces electorales con competencia electoral exclusiva en las provincias. Esta norma del artículo 6º, segundo párrafo, únicamente podrá ser operativa cuando se cree un juzgado electoral con competencia electoral de primera instancia exclusiva. Mientras existan juzgados federales con competencia múltiple, serán las cámaras de esas jurisdicciones, que tienen la superintendencia de esos tribunales,

quienes deben intervenir en las subrogancias, en las vacancias y en la aplicación de esta norma.

El Consejo de la Magistratura y este Senado intervendrán en las listas de conjuces que se deben elaborar conforme el artículo 8º. Pero la cuestión de inmediatez, la residencia en el lugar donde se va a ejercer la subrogancia y la pertinente superintendencia que tiene el tribunal de segunda instancia de la jurisdicción federal de las provincias es la que determina con más razonabilidad esta aplicación.

Esta norma únicamente podrá ser aplicable cuando se creen juzgados electorales con competencia exclusiva. Esto viene a colación porque existe una vieja reivindicación de la Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral viene sosteniendo, pero únicamente ella, que ya se han creado, a través del Código Electoral Nacional, jueces electorales con competencia exclusiva. Es más, le ha pedido al Consejo de la Magistratura la convocatoria a concurso de esos juzgados.

Señora presidenta: desde este Congreso de la Nación, desde este Senado, nosotros reivindicamos dos cuestiones. Los juzgados federales los crea únicamente una ley del Congreso de la Nación; los juzgados federales los habilita exclusivamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la base de una ley especial. La mención que hace el Código Electoral de la Nación a juzgados electorales es que son juzgados con competencia electoral y siempre se hizo en función de aquellos juzgados que eran más antiguos, el primero creado de las jurisdicciones locales, que llevaban el padrón o el registro de empadronados, que son los que iban a sufragar.

Es más, en su momento, incluso, lo hemos charlado en el Consejo de la Magistratura. Como este Senado tiene representantes en ese ámbito, se había avanzado en desdoblar la competencia del Juzgado Federal de La Plata, con competencia electoral, y asignarle un secretario que subrogara la competencia del juzgado electoral.

Los juzgados son íntegros y su competencia no es divisible. Y nunca el Congreso de la Nación creó juzgados de primera instancia con competencia electoral exclusiva. Mientras ello no ocurra, no podrá ser operativa esta norma porque interfiere y colisiona con la otra norma general, que sí respeta la creación de los juzga-

dos y, fundamentalmente, la congruencia de que quienes tienen la superintendencia general de un tribunal con competencia múltiple, también la ejerza en función de la subrogancia y aun de los pedidos de licencia. Nada más, presidenta.

Quería dejar sentada esta posición, que es la que fue manifestada y expresada unánimemente en el ámbito de la Comisión de Justicia cuando se trató este proyecto de ley.

Muchas gracias.

Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted, senador.

Vamos a comenzar con los cierres, así que si hay algún pedido de palabra para los cierres...

Sr. Mayans. – Pido la palabra.

Sra. Presidente. – Senador Mayans: tiene la palabra.

Sr. Mayans. – Brevemente, señora presidente, quiero destacar dos temas.

Uno es el tema del sorteo público...

Sra. Presidente. – Perdón, ¿usted no está haciendo el cierre?

Sr. Mayans. – No, no.

Sra. Presidente. – Es sólo para agregarse a la lista. Perfecto.

Sr. Mayans. – Simplemente dos puntos, que son importantes.

Primero, el tema del sorteo público, que me parece que es importante remarcarlo.

Y, después, la lista de conjueces, que tiene que ser aprobada por dos tercios del Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo y al Senado para el acuerdo. Me parece que es importante este tema para tener un mejor desenvolvimiento en el tema del área judicial.

Nada más, presidenta.

Sra. Presidente. – Gracias a usted.

Senador Rodríguez Saá: ¿me pidió la palabra para cierre?

Sr. Rodríguez Saá. – Para cierre.

Sra. Presidente. – Entonces tiene la palabra usted, senador.

Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, presidenta.

Defender los derechos y garantías que nos da la Constitución Nacional parecería redundante a esta altura del siglo XXI. Sin embargo, son puestos en duda todos los días. Y debemos tener una firme y seria posición sobre el debido

proceso, la necesidad del debido proceso, el principio de inocencia. El principio de inocencia está ligado a la dignidad de las personas.

Hoy los medios de comunicación deciden, antes de que los jueces opinen, si una persona es inocente o culpable. Y no solo eso, sino que tratan de ponerla en la peor situación en su dignidad. Y en esto se prestan también aquellos que, cuando detienen a una persona, la filman en pijama o le ponen un sombrero ridículo, que la prensa luego... ¿Podrá esa persona detenida pedir que no le pongan ese sombrero? ¿O que no le pongan un chaleco antibalas absolutamente innecesario? ¿O que no la ridiculicen ante el pueblo? ¿Cómo se sale después de eso? Y si es inocente, como lo establece la Constitución, ¿quién va a reparar semejante daño hecho ante los familiares, los amigos, los vecinos, los ciudadanos?

Entonces, me parece que en este ámbito debemos reflexionar. Estas cosas no deben suceder. Estas cosas que se están haciendo, que se hacen ahora, serán una de las peores manchas que tendrá esta época.

El derecho a juzgar a cualquier persona fruto de la sospecha de que haya cometido un delito es lo que corresponde, y hay que hacerlo. Y los jueces no deben demorar tanto tiempo para hacerlo. Pero ridiculizar, quitarle la dignidad, faltarle el respeto a las personas es una falta gravísima e inaceptable a esta altura de la historia.

El juez natural es una cosa elemental. A la persona que va a ser juzgada, la Constitución le da el derecho de que sepa cuál es el juez. Y ese es el juez que lo tiene que juzgar. No cualquier juez. No un juez a medida, un juez que ayude a tapar el delito o un juez que condene sin haber dado derecho a defensa. No. No es lo que corresponde. Lo que corresponde es juzgar, permitir que el debido proceso se realice y que la persona, el ser humano que está sometido al juzgamiento, tenga el derecho a defenderse con dignidad.

Por eso, vale la pena –con permiso de la señora presidenta– leer una parte de la Constitución, porque es bueno repasar lo que dice la Constitución: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de

la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes”.

Claro: en el siglo XIX, los azotes; en el siglo XX, presentarte ante la televisión con un gorro de Gendarmería. Eso es un tormento, una pena adicional a la situación que está viviendo un ciudadano que está siendo investigado y juzgado y que, si es culpable, deberá sufrir la condena correspondiente, pero, si es inocente –y aun siendo culpable–, nadie tiene derecho a faltarle el respeto y a la dignidad humana.

Por eso, me parece que esta ley que vamos a tratar ahora es un paso importante. Quizá no solucione todos los problemas que se plantean, pero es un paso importante.

La Corte Suprema, en el caso “Uriarte”, tuvo que declarar la inconstitucionalidad de la ley 27.145 porque afectaba la independencia del Poder Judicial y la garantía del juez natural para los ciudadanos, en tanto permitía al Consejo de la Magistratura...El Consejo de la Magistratura está puesto como un órgano, ahora, que está por encima de todos: encima del Parlamento, encima de la Corte, encima del Poder Ejecutivo. Es un grupo cerrado desconocido, que delibera en la oscuridad y que resuelve con acuerdos entre ellos de acuerdo con las conveniencias y que tienen sueldos impresionantes. ¡Impresionantes! No porque tengan sueldos impresionantes, sino porque es toda una cosa cerrada, oculta. No me parece bueno. Y deciden sobre cosas que me parece que no les corresponden. Por eso, le declaran la inconstitucionalidad. Y hacen maniobras como esto de elegir el juez y ponerle a una persona el juez a medida.

Por eso, me parece que estamos dando un paso trascendente a favor de los derechos de los ciudadanos, un paso trascendente para respetar la Constitución Nacional.

Por esa razón, nosotros vamos a votar favorablemente esta ley.

Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador. Senador Rozas.

Sr. Rozas. – Simplemente, a los efectos de hacer una aclaración.

Sr. Rodríguez Saá. – Estaba cerrado el debate, senador.

Sra. Presidente. – Le iba a preguntar eso. ¿Es solamente para una aclaración, senador Rozas?

Sr. Rozas. – Es para hacer una aclaración.

Sr. Rodríguez Saá. – Si el debate está cerrado, está cerrado; no hay aclaraciones.

Sr. Rozas. – ¿Cambiamos al presidente del Senado, ahora? No sabía que habíamos votado a un nuevo presidente.

Sra. Presidente. – Okay, va a hacer una aclaración, algo cortito.

A ver, senador.

Sr. Rozas. – Hemos sido, junto con otros legisladores –yo hablo por mí–, miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación.

En primer lugar, quiero decir que los legisladores no tenemos sueldos. Es una carga pública una vez que aceptamos ser miembros del Consejo de la Magistratura. Esto es importante aclararlo porque, si no, la gente cree que tenemos doble sueldo: el de legislador –por el cual ya nos critican bastante– y, encima, un sobresueldo por ser miembros del Consejo de la Magistratura. Pero esto no es así, nosotros no tenemos sueldos.

En segundo lugar –y termino–, no es un lugar oscuro ni es un lugar cerrado. Las audiencias y los plenarios son públicos, son abiertos, puede participar la ciudadanía –el que quiera ir a escuchar, puede hacerlo libremente– y pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con las medidas que se tomen por mayoría o no, pero no es un lugar oscuro ni un lugar mafioso ni nada que se le parezca. Gracias.

Sra. Presidente. – Gracias, senador.

Seguimos con los cierres.

Senador Fuentes, ¿me pidió la palabra?

Sra. Fernández de Kirchner. – Si todos aclaran, yo quiero hacer una aclaración...

Sra. Presidente. – Perdón, ¿me está pidiendo la palabra?

Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, presidenta.

Sra. Presidente. – Senadora Fernández de Kirchner, tiene la palabra.

Sra. Fernández de Kirchner. – Señora presidenta: la verdad es que no pensaba intervenir en esta oportunidad.

Nuestro bloque va a votar positivamente, pero debido a la aclaración que acaba de formular el senador preopinante en relación, seguramente, con el discurso del señor senador por la provincia de San Luis, no puedo menos que hacer una aclaración yo también.

He escuchado que en las sesiones del Consejo de la Magistratura participa la ciudadanía, y la verdad es que no quiero que quede asentado taquigráficamente en el Diario de Sesiones como si convalidáramos lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, lo que está pasando en el sistema judicial argentino y lo que está pasando con el Poder Judicial, en general, en la República Argentina.

Digo esto por haber sido convencional constituyente cuando se introdujo la reforma del Consejo de la Magistratura. También quienes fueron compañeros míos en la Convención sabían de mi opinión no favorable a esta institución que ha funcionado muy bien en el derecho continental europeo, pero que acá se ha transformado en un instrumento corporativo, “aunque” absolutamente politizado. Por eso tuvo razón de ser el haber enviado a este Parlamento, cuando fui presidenta –y con el concepto de democratización de la Justicia–, un proyecto para que el Consejo de la Magistratura estuviera integrado por jueces, abogados y legisladores, como ahora, pero que esos jueces y esos abogados fueran votados por la ciudadanía. Los legisladores ya están habilitados, claramente, por el voto popular, porque en esa calidad acceden al Consejo de la Magistratura.

La verdad es que ahora no es el momento –seguramente ya lo haremos en algunas de las oportunidades siguientes–, pero ni siquiera hay que ponerse a analizar lo que está pasando: hay que describir simplemente las cosas que están sucediendo para ver que, realmente, en el Consejo de la Magistratura puede pasar cualquier cosa menos que sesione con la participación de la ciudadanía.

Nada más, señora presidenta. Quería dejar hecha también esa aclaración. Gracias.

Sra. Presidente. – Senador Fuentes: ¿lo tomo como cierre? ¿Usted me estaba diciendo eso?

Sr. Fuentes. – Me equivoqué, voy a hacer yo el cierre.

Sra. Presidente. – Okay, perfecto.
Senador Mayans.

Sr. Mayans. – Presidente: con respecto a este tema, por eso le dije el senador Rodríguez Saá: “cerramos”...

Sra. Presidente. – Sí, lo entiendo perfecto.

Sr. Mayans. – ...Porque una vez que se cierra, si se aceptan interrupciones, pasa esto, presidenta: empezamos a aclarar todos y no aclaramos nada.

Entonces, una vez que empieza el cierre, empieza el cierre.

Sra. Presidente. – No hay ningún problema. Si yo le di la aclaración, la van a tener todos.

Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, presidenta.

Yo también quiero hacer una aclaración respecto de la participación en el Consejo de la Magistratura.

A mí me tocó como diputada nacional ser miembro del Consejo de la Magistratura y tuvimos un caso muy emblemático, que es el caso del jury de enjuiciamiento al doctor Montesanti, que luego se lo llevó a jury y, antes de que se sancionara su destitución, él renunció y el presidente Macri inmediatamente le otorgó la aceptación de esa renuncia.

En ese proceso, nosotros estábamos tratando de enviar a jury al doctor Montesanti, juez de la cámara de Bahía Blanca, que estaba sospechado de ser cómplice de delitos de lesa humanidad... Estamos hablando de un caso muy emblemático de la provincia de Buenos Aires, donde hay medios involucrados. De hecho, acá, en este recinto, prontamente vamos a tratar y a seguir con el caso de Bahía Blanca, pero eso lo vamos a tratar después. Decía que, en ese momento, quien les habla pidió que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo pudiera hablar en el Consejo de la Magistratura y expresarse, juntamente con varios organismos de derechos humanos que la acompañaban, en tanto la participación o la

sospecha de participación desde la judicatura del doctor Montesanti.

Hubo legisladores, que en ese momento eran oposición y hoy son oficialismo, que eran miembros del Consejo de la Magistratura y que votaron en contra de que Estela de Carlotto pudiera dar su opinión en ese recinto respecto de un tema tan caro para los argentinos como es la complicidad civil en los delitos de lesa humanidad.

No obstante esto, tengo otra anécdota, que tiene que ver con algo que se judicializó y tiene que ver con la banca que yo dejé como diputada nacional, que es la unión transitoria de bloques que se hizo en el año 2015 para que el diputado Tonelli se quede con la banca que era del Frente para la Victoria, esa banca que yo dejaba porque asumía como senadora nacional.

En ese entonces, varios legisladores –recuerdo que estaba la senadora Pilatti y quien les habla– fuimos al Consejo de la Magistratura a tratar de dialogar sobre el tema y quien era el presidente del bloque del Frente para la Victoria en ese entonces, el doctor Recalde, pidió la palabra para poder hacerse escuchar ante los miembros del Consejo de la Magistratura sobre la problemática que estaba viviendo la representación partidaria y popular, en su caso, con legisladores en este caso de la Cámara de Diputados de la Nación.

Los miembros del oficialismo actual y, por supuesto, los magistrados y los representantes de los abogados, votaron en contra de que se pueda hablar en el plenario de comisiones y, a partir de ahí, no se deja ingresar ciudadanos ni ciudadanas para que puedan ser espectadores de las reuniones del Consejo de la Magistratura.

Esto lo quiero dejar claro porque es lo que pasa en el Consejo de la Magistratura. Y, además, es mentira que cualquier ciudadano pueda acceder a algo que debería ser público y a algo que les interesa a todos, que no es más que la selección de los jueces y juezas de la República Argentina.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente. – Gracias a usted.

Han quedado las aclaraciones hechas.

Tiene la palabra el senador Fuentes, que va a hacer el cierre.

Sr. Fuentes. – Nosotros vamos a acompañar a los efectos de sumar algo de certeza a lo que es una materia manoseada y dado que las implicancias en la historia institucional son graves cuando se manipula esto.

Esto me da pie para explicar que la discusión de temas como la subrogancia, o sea, el concepto central de juez natural, el concepto de la garantía a los judiciales en justicia, la reforma de un Código de Procedimiento Penal y la intromisión del Estado en la privacidad de los ciudadanos no son temas ligeros. Pero, además, no son temas que impliquen el conocimiento de los especialistas, sino, fundamentalmente, tienen que ver con el momento histórico particular y en qué circunstancias acuciantes estos temas se discuten.

Por eso, una sabia disposición tradicional en nuestro derecho es que la materia penal no puede ser plebiscitada. Ante el pedido de venganza –de *vendetta*– o de justicia, no se puede legislar, como hemos tenido antecedentes no muy lejanos al respecto.

Todo esto que está sucediendo con la justicia en la República Argentina fue oportunamente enunciado en Washington, en la Cámara de Representantes, durante las jornadas de la Cumbre de Medios de Comunicación de la fundación CERTAL en Miami, con la presencia de lo más granado de la magistratura argentina, con sus gastos pagos. Y, posteriormente a ese debate de varios días en Miami, terminan concurriendo al besamanos en la Comisión de Relaciones Exteriores convocados por la presidenta, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Además, cuando uno entra en la página del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones observa que, si bien mantiene la estructura con información de los concurrentes, los contenidos de los discursos han sido eliminados en dicha página.

En concreto, en ese evento en Washington se celebró la alianza estratégica entre los grandes medios de comunicación de América Latina y la llamada judicatura de las Américas, como la única barrera oponible a lo que se definió como los populismos latinoamericanos.

Ese esquema de 2012, donde esa alianza se plasma y se bendice en el país del Norte, se aplicó posteriormente a lo largo de los años con respecto a la actuación de la magistratura a

partir del abuso de esa institución que consagra nuestra Constitución, que es el control difuso de constitucionalidad. De ese tema hemos hablado reiteradas veces.

En ningún lugar de Occidente los magistrados juzgan leyes. El Poder Judicial juzga hechos, actos, conductas, resoluciones a la luz de leyes. Las leyes las juzga un tribunal específico, político, que es el tribunal de constitucionalidad, tanto en los regímenes presidencialistas como en los parlamentarios. Así, en Francia lo conforman expresidentes y en Bolivia, tras la nueva reforma de la Constitución, esa Corte de Constitucionalidad es electa por el voto popular.

Hay numerosas posibilidades de conformarlo, pero, fundamentalmente, un decisorio claro, político, de una sociedad organizada, que es que las leyes se discuten en un tribunal específico, con procedimientos acotados y responsabilidad política. No es objeto de la presión de cualquier magistrado del circuito que puede anteponer una cautelar, como nuestro gobierno padeció durante un tiempo en materias importantísimas para los argentinos. Es inimaginable que un juez de circuito de Londres pueda paralizar una norma de los Comunes o que uno francés pueda hacer lo mismo.

Este es uno de los grandes temas con el que está en deuda nuestro sistema constitucional: una corte o un tribunal de constitucionalidad surge necesario.

Los asistentes en ese momento... Y es notable porque todo se vincula. Escuchaba el otro día cómo la senadora del bloque del oficialismo explicaba que con la ley de compra nacional estábamos defendiendo particularmente al ARSAT. Entonces se da este grado de esquizofrenia, donde por un lado defendemos al ARSAT con esta norma legal y, por el otro, en la Comisión de Medios estamos discutiendo cómo destruirla o desgazarla en función de quitarle los derechos que tenía dados anteriormente.

Entonces, yo quiero que recordemos la gravedad de este evento, porque en este evento, en medio del conflicto de la ley de medios –valga la redundancia–, los magistrados que intervenían en esa cuestión estaban siendo agasajados y concurriendo a un encuentro que lo conformaban la totalidad de los medios oligopólicos en América Latina.

Es más, cuando vemos quiénes hacen los auspicios institucionales: HBO, Cablevisión, Discovery, Comunicaciones... O sea, la totalidad de las empresas, en ese momento, financiaban el paseo de los señores magistrados en Miami con los gastos pagos para, posteriormente, concurrir de manera genuflexa a Washington a dar garantía, a dar garantía de que la ley de medios en la Argentina no iba a pasar. Magistrados. Y esto tiene que ver porque, en ese momento, quien era representante de la Asociación de Magistrados en el Consejo de la Magistratura encabezaba la delegación argentina. Ya, en ese momento, el CEO, el gerente general de Cablevisión... Mesa de CEO “Desafío de las nuevas tecnologías en la industria audiovisual”: señor Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión; señora Marta Ochoa, directora de DirectTV Latinoamérica; arquitecto Stigol, CEO de Inter Venezuela; VTR Chile, el señor Carvallo.

Ya, en ese momento, Moltini es interesante. Yo rescaté, precisamente, el debate de la sesión del día 31 de octubre-1º de noviembre, a altas horas ya de la noche. Digo rescaté porque en este momento no figura, cuando uno entra en la página no lo va a encontrar; figura el discurso, pero no su contenido. Ahí el señor Moltini, primero, manifiesta que es importante que los grandes medios y los jueces se conozcan porque, evidentemente, estaban distanciados.

Entonces, en ese momento, él plantea que “venimos por todo”, es decir, contenidos, todos los medios, lo que hoy se está discutiendo: la posibilidad de tener acceso a través de lo satelital, del cable. “Venimos por todo, en todo momento y en todo lugar”, dice. ¡Ese es el concepto ante los señores magistrados que tenían que fallar en torno al monopolio de los medios de comunicación en la Argentina! ¡Esto es como que uno se entere que tiene un juicio de divorcio y el señor magistrado está viajando de paseo con la señora de uno, por ejemplo!

Me acuerdo que, incluso, dio motivos –cuando voy hablando de quiénes conformaban el paquete y la magnitud de los intereses que estaban en juego y las figuras estelares, tanto de las magistraturas argentina, brasilera, paraguaya y uruguaya– y me acuerdo que este gran amigo –al que, creo, todos extrañamos–, el senador Cimadevilla, cuando estoy hablando de CERTAL, textual, en el acta de la sesión dice: “CERTAL, pero CER-

TAL, senador, no es Al Qaeda”. Entonces, yo le contesto –supongamos que el nombre no lo tenía presente–: “Pero entremos a ver de qué se trata CERTAL. Como bien dijo el senador Cimadevilla, CERTAL no es Al Qaeda, pero CERTAL tampoco es Paratropina”.

CERTAL era la consolidación de un proyecto político-económico de dominio, a escala continental, de las comunicaciones en Latinoamérica. Y cuando ese proyecto se explicita ante la Cámara de Representantes norteamericana para tener la bendición, ¡la bendición!, del país del Norte, la magistratura argentina, integrante del Consejo de la Magistratura, en este caso en la figura del magistrado Recondo, asiste y da un discurso incendiario en torno al chavismo, en torno al avasallamiento de la libertad de prensa. O sea, un poder que debía resolver un conflicto profundo de intereses es agasajado y participa y define, y define, prejuzga en una situación de dramaticidad.

Por lo tanto, ese es el marco de incertidumbre. Perdonen que haya traído a colación sin haberlo ordenado bien el tema de CERTAL. Y el otro, que si hace más directamente a lo que hoy venimos a discutir, señores y señoras senadoras, es el estado de la realidad política en la Argentina y la legislación que estamos discutiendo.

Lo venimos diciendo permanentemente: no se puede precarizar el empleo en la Argentina. No se puede precarizar el régimen previsional en la Argentina. No pueden caer brutalmente las pautas del consumo popular y hoy están repartiendo pan en la plaza, acá enfrente. No se pueden generar los tarifazos de la magnitud que se generan si quien lo hace no tiene dispuesta una estructura represiva en consecuencia. Y esa estructura represiva está dispuesta: veamos los reequipamientos, los manuales, los convenios, los convenios de cooperación con Israel en materia de equipamiento. Veamos hoy cuáles son las fuerzas de seguridad, cuáles son los integrantes de los aparatos de represión en la Argentina que han sido actualizados en su material y modernizados: Gendarmería, Prefectura, Policía Aeronáutica.

Entonces, esta legislación que hoy estamos discutiendo, con la sola posibilidad –en un clima de sensibilidad y suspicacia– de generar reparos de que no sea el complemento, ese equipamiento de ese Estado represivo, el estar

dictando normas que faciliten la persecución de opositores, luchadores sociales y, ante la sola posibilidad de la sospecha, amerita la presencia de las distintas instituciones y organizaciones de la sociedad.

Este es el pecado de origen del debate del día de hoy en los tres temas. Estamos discutiendo un conjunto de medidas donde legítimamente sectores de nuestra sociedad dicen que detrás de eso está la mano represiva del Estado anunciándose o el Gran Hermano vigilando y violando nuestras intimidades.

Simplemente, entonces, en medio de este paquete de tres leyes que han sido traídas con tanta premura al recinto, entendemos que debemos dar por lo menos certeza en una, independientemente de que cuestionemos el mecanismo con el cual esto fue discutido. Por lo tanto, mi bloque va a acompañar en general y en particular la norma que está en discusión.

Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador Fuentes.

Tiene la palabra el senador Urtubey.

Sr. Urtubey. – Gracias, señora presidenta.

Pasa una cosa curiosa en esta ley en especial: como senador, creo que es la cuarta ley sobre subrogancias en la que voy a opinar. Realmente debemos preguntarnos qué pasa en la Argentina que en los últimos pocos años tenemos dos declaraciones de inconstitucionalidad de la Corte –el caso “Rosza” y el caso “Uriarte”– y esta va a ser la cuarta ley de subrogancias con la que intentamos resolver un tema que en la Argentina no existía.

Yo les recuerdo a muchos colegas que ejercen la profesión o actúan en la política o en la función pública que en la Argentina existió un decreto, el 1.285/58, de la ley orgánica de la justicia nacional, que era la que establecía los métodos de cobertura de magistrados. Y la verdad es que funcionó durante cuarenta años y nadie se preguntaba qué pasaba con las subrogancias. Yo creo que los jueces hoy se jubilan, se enferman o se mueren con la misma frecuencia con que lo hacían a lo largo de estos cuarenta años y, sin embargo, no teníamos estas situaciones que nos fueron obligando a todos los gobiernos a tratar el tema. Lo digo porque las tres primeras leyes a las que me voy a referir no solamente las voté, sino que en su momento también tuve alguna

intervención como miembro informante y no logramos dar con la solución. Evidentemente no logramos dar con la solución, descontando la buena fe de todos los que intentamos de diversas maneras resolverlo.

¿Y por qué pasa esto? Yo quiero aventurar una opinión. Esto pasa porque antes del 94 los procesos de cobertura de cargos judiciales eran más o menos inmediatos en todos los casos. Es decir, el Poder Ejecutivo le mandaba al Senado y el Senado cubría el cargo. Por eso ninguno de nosotros tiene memoria de que las cámaras federales estuvieran con muchas vacantes, de que los tribunales orales estuvieran con vacantes o de que hubiera que hacer esta ingeniería de sacar de uno para poner en el otro. La verdad es que esto en el sistema judicial argentino no existía.

Acá hay que hacer una autocrítica y es que estamos tardando entre tres y cuatro años para cubrir una vacante de un magistrado. Entonces, bueno, seguiremos haciendo todas las leyes de subrogancia que podamos, pero me parece que, justamente ahora que estamos discutiendo, por lo menos en la Cámara de Senadores, una reforma a la ley del Consejo de la Magistratura, sería interesante que además de, por supuesto en el caso nuestro de la política, pelear para que la política siga teniendo una representación que no sea vea licuada por las corporaciones dentro del Consejo, veamos cómo podemos hacer para que no tardemos tres o cuatro años para cubrir una vacante de juez, porque, si no, lo que decía el senador Rodríguez Saá, nos va a ser cada vez más difícil cumplir con esta idea del juez natural.

En ese sentido, me parece que esta ley es el producto de las experiencias frustradas y fallidas de la leyes 26.372, 26.376 y 27.145.

No sé si es el mejor sistema el que se propone. Es bastante parecido al sistema originario del decreto 286/58. Pero nos da un sistema objetivo y bastante transparente, por lo menos si se lo compara con la actual situación de la forma en que se maneja la cobertura de los cargos. Por lo tanto, hay que apoyarlo en ese sentido. Destaco esta idea de sorteo público, que parece algo obvio, pero, bueno, hemos tenido que llegar a un sorteo público para devolver esta idea de credibilidad respecto de cómo se cubren las vacantes.

Pero, repito, si estamos siempre desvestiendo un santo para vestir a otro, vamos a aplicar este sistema objetivo. Pongo un ejemplo: esta ley plantea que las vacantes en las cámaras se resuelvan por resolución de las propias cámaras entre jueces integrantes de la cámara en primer lugar y, después, de otros tribunales en un orden de prelación de la misma competencia y de la misma especialidad.

Ahora bien: va a pasar que este sorteo sea imposible porque no haya otros miembros de la cámara, como de hecho puede pasar en algún caso en boga, y entonces lo que hacemos es desvestir tribunales orales federales, por ejemplo, para ir a la cámara. Si, por otro lado, estamos diciendo que hay que reforzar la justicia oral federal por la escasez de tribunales, es bastante contradictorio que, por un lado planteemos que las causas lleguen a juicio oral, que los juicios orales se hagan y, por otro lado, debilitemos los tribunales orales federales para resolver el tema de las cámaras. Fijese que además esto genera una gran injusticia, sobre todo para las personas sometidas a proceso porque después el tribunal oral se plantea trabajar una o dos veces por semana y mantiene estos larguísimos juicios, que realmente no es la forma más apropiada para impartir justicia en la Argentina.

Por eso, con esta salvedad y diciendo que esto es una especie de tapar el sol con las manos, porque si no resolvemos el problema de raíz, que es que tardamos muchísimos años para cada proceso de selección de magistrado, obviamente la apelación o la invocación del senador Rodríguez Saá en cuanto al juez natural se ve conculcada por esta forma de funcionamiento.

Por supuesto, reivindico al Consejo de la Magistratura en torno a su función institucional, pero debemos reconocer también con mucha honestidad que tenemos que trabajar muchísimo en el tema de selección de magistrados. Y tenemos que aprovechar en este caso la posibilidad en la Cámara de Diputados de sancionar una ley superadora a la actual para que el Consejo retome un ritmo razonable en la selección de magistrados.

Por estas mismas razones, en este caso voy a decir que el Consejo de la Magistratura no elija a los subrogantes, porque si a este cúmulo de males, que es un mecanismo tortuoso para la selección de magistrados, que demora tres

o cuatro años promedio, le vamos a sumar un mecanismo tortuoso, deliberativo, de voto de dos terceras partes del Consejo, para designar un subrogante de un tribunal, me parece que estamos errándole a la cuestión. Por eso digo que prefiero este sistema objetivo, que reconoce antecedentes en este decreto 285/58, que funcionó muy bien durante cuarenta años, antes que seguir con el sistema actual. Por eso, desde nuestra bancada, vamos a apoyar este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente.

Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador. Tiene la palabra el senador Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Gracias, presidenta.

Creo que estamos cerrando un debate con un gran acuerdo, con esta nueva ley, para dar cumplimiento a un fallo de la Corte, en el caso “Uriarte”. Pero, indefectiblemente, como acá se ha dicho, hay determinados parámetros que fueron establecidos en la reforma del 94 que no se cumplieron. Desde el objetivo de atenuar el presidencialismo, lograr una administración de justicia, una Justicia independiente, fortalecer el federalismo, son asignaturas que evidentemente hoy están pendientes.

En esta materia, concretamente, en materia de jueces, de designaciones, más allá del criterio rector del artículo 114 de la Constitución, con la creación del Consejo de la Magistratura como mecanismo de selección –yo, en verdad, reivindicó el objetivo central del propio consejo–, me parece que esta idea de seleccionar y la participación del Ejecutivo y del Senado cuando se eleva la terna, en la resolución final, al final del camino, es una herramienta que garantiza absolutamente criterios rectores de jueces que tengan probidad e idoneidad en el ejercicio de la función.

El problema está o se da, a veces, cuando desde la política se intenta de manera deliberada –a veces descarada, a veces disimulada– hacer de este poder, que es independiente, una herramienta de cooptación, una herramienta de subordinación.

Con esa lógica –que no solamente se da en el ámbito federal, sino que se reitera en muchas provincias argentinas– de que, con el hecho de designar un fiscal o un juez amigo, o un fiscal o un juez que responda a determinadas pertenencias partidarias, supuestamente, hay un

alineamiento político que se verá correspondido con el paso de los años, se comete un grave error; grave error. Los jueces responden para sí. Los jueces integran un poder absolutamente corporativo. Y el mayor de los errores es que nosotros desvirtuamos la propia esencia del Poder Judicial.

Va esto a cuento de todo lo que se ha dicho, este esquema de supuestas persecuciones, de fiscales que investigan, de jueces que hoy juzgan, que hoy avanzan, porque son los mismos que fueron designados con la selección o con las subrogancias en los años inmediatos que precedieron a la gestión nuestra.

Entonces, digo, para poner las cosas en su lugar: ¿qué tenemos que hacer con esta ley? Encontrar un marco de racionalidad ante una Justicia que está absolutamente cuestionada por dos ejes centrales para la sociedad. En primer lugar, por el retardo en la decisión de las propias causas. En segundo lugar, por la pérdida de confianza y de credibilidad. Miren: si hay un poder que está devaluado, mucho más de lo que se cree, más allá del bastardeo permanente a que se somete al Poder Legislativo desde distintos ámbitos, es el propio Poder Judicial. Y la devaluación del Poder Judicial tiene que ver con el desapego a la ley, con la falta de criterios objetivos, con tener en claro cuál es el objetivo rector cuando uno asume ese carácter de fiscal. Y en ese sentido me parece que hay que recuperar ciertos criterios de normalidad.

A ver, la subrogancia: ¿estamos solucionando un problema? Por supuesto. Pero, ¡guarda!, que la subrogancia es para cubrir una vacancia temporal y, cuando se cubre una vacancia temporal, un juez que está a cargo de otro juzgado, también se dilata de alguna manera la resolución final de los conflictos que están pendientes. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es articular con mucha fuerza todas las materias que nos quedan pendientes. En 2016, creo que el promedio era que, de cada tres juzgados que estaban vacantes, solamente se cubrió uno y eso viene de arrastre.

Entonces, acá lo que tenemos que hacer es cumplir con los parámetros constitucionales: un Consejo de la Magistratura que eleve ternas, un Poder Ejecutivo que las eleve al Senado y un Senado que las trate.

Cuando uno detenta una mayoría circunstancial en el Consejo de la Magistratura, a veces creemos que esas mayorías son eternas. Así, algunas veces se contó con siete miembros y con esos siete miembros la apuesta no fue la designación de jueces, sino la de subrogantes, mirando de alguna manera la afinidad o apostando a la afinidad. Entonces, se llegó a un extremo de designar a un juez que subroga en La Plata, que era secretario de un juzgado, en un juzgado de La Plata, que tiene el 40 por ciento de un porcentaje del electorado. Ahí está cuándo se desvirtúa la propia esencia. Entonces, para no desvirtuar la esencia, esta ley subsana y pone las cosas en su lugar. Creo que podemos dar un paso en lograr cierta previsibilidad. Pero, más allá de la previsibilidad de la ley de subrogancias, me parece que lo que tenemos que darle es contenido al 114.

Una última reflexión en cuanto a lo que se ha dicho de los sistemas de democratización, del Consejo de la Magistratura o de la democratización de la Justicia o de lo que se intentó hacer en algún momento. Nosotros no estábamos de acuerdo con ese principio, porque estamos convencidos de que, detrás del discurso de la democratización, lo que se venía era una gran avalancha de cooptación y de discrecionalidad.

Esta es una ley correctiva y creo que vamos por el buen camino.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador. No hay más pedidos de la palabra.

Se vota a mano alzada ahora en general y en particular... Lo hacemos electrónicamente, entonces, en general y en particular.

Sr. Snopek. – Las inserciones...

Sra. Presidente. – Las inserciones, sí, a mano alzada.

– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Están aprobadas.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU

Señora presidente:

Acompañaré el proyecto C.D.-69/17, sobre régimen de las subrogancias, en cuanto viene a ponerle un límite a una práctica viciosa que ciertamente se utilizó en muchas épocas de nuestra historia, pero más intensamente en los últimos tiempos.

Que el régimen de las subrogancias necesite una ley es una evidencia del estado crítico del funcionamiento del Poder Judicial.

Las vacancias en un juzgado o en un tribunal colegiado, por ascenso o traslado, enfermedad, muerte, remoción o renuncia no deberían alcanzar más que a números marginales y que se administrarían sobradamente con soluciones pretorianas individuales.

Pero la realidad ha sido otra. Por infinidad de razones, las vacantes son muchas y también es intensa la tentación de cubrir las, aunque sea transitoriamente, por un juez amigable, sobre todo cuando él va a juzgar hechos actuales o futuros que le interesan al gobierno de turno.

Hace escasos días vimos con escándalo cómo operó el traslado de un juez de una cámara a otra, de diferente competencia, por motivos como el denunciado.

Nuestra estructura constitucional, con razón, ha contemplado la designación de los jueces atendiendo a su trascendencia e importancia institucional. De allí que sea un acto complejo, en el que interviene la competencia entre los concursantes, el órgano examinador y el Consejo de la Magistratura. Luego el Poder Ejecutivo, seleccionando de las ternas que se le proponen. A continuación, los ciudadanos ejercitando el derecho a impugnar y, finalmente, el Senado prestando o denegando acuerdo.

De todo ese proceso resulta un juez para una competencia específica y para un tribunal unipersonal o colegiado determinado. En suma, un juez natural (el destinatario de la efectividad de la garantía de igual nombre).

Alterar este proceso mediante una decisión transitoria, que desvíe la decisión final del Senado atribuyéndole otro destino, fue y es una lesión a la garantía que venimos refiriendo.

La iniciativa que votamos pone fin a esta posibilidad y esto es bueno. Hago votos para que las ocasiones de aplicación de esta ley se reduzcan a su mínima expresión, lo cual significaría que se reduce regularmente el número de vacantes porque el Consejo de la Magistratura las cubre en tiempo y forma.

A título de sugerencia hermenéutica al texto que se somete, hago votos para que en la aplicación se elimine todo margen para la discrecionalidad y, cuando existan dos o más jueces en condiciones de cubrir una vacante, no se libre su designación al criterio (objetivo o subjetivo) de quien la concrete, sino al sistema más tradicional de justicia elemental: el sorteo.

Por estas razones y con este modesto aporte, fundo mi voto positivo.

Sra. Presidente. –Vamos a votar en general y en particular, si no están en desacuerdo, por voto electrónico.

Se vota.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del Día N° 33/18, en general y en particular: 61 votos afirmativos, cero votos negativos y cero abstenciones.

– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sra. Presidente. – Resulta aprobado, entonces. Se comunica al Poder Ejecutivo de la Nación bajo el número de ley 27.439.²

9

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN (O.D. 35/18 Y ANEXO)

Sra. Presidente. – Corresponde el tratamiento del orden del día que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día N° 35/18 y anexo. Dictamen en minoría, senadora Sacnun. Impreso el día 11 de abril de 2018. Es un dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley de los señores senadores Urtubey y Guastavino por el que se modifica el Código Procesal Penal de la Nación. (S.-18/18.)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Guastavino.

Sr. Guastavino. – Señora presidenta...

Sra. Presidente. – La lista de oradores se va a ir confeccionando y vemos si después la cerramos.

Sr. Guastavino. – Si se me permite, presidenta, me parece importante hacer brevemente un racconto histórico de lo que ha sido la historia del nuevo Código Procesal Penal, sobre todo para ir refrescando la memoria de todos nosotros, los que participamos en ese debate y en esa sanción, como así también de los senadores que se han incorporado en este período legislativo.

Ya en abril de 2014 la Comisión de Justicia comenzó a tratar este tema impulsada, quizá, por el desarrollo que habían tenido mayoritariamente en todas las provincias las sanciones y puestas en marcha e implementación de códigos procesales penales –esto de pasar del

inquisitivo al adversarial– y porque el éxito de estas implementaciones empujaba fuertemente para que a nivel nacional, en el fuero federal y nacional, se pudiera avanzar con un código de estas características con el objeto, obviamente, de encontrar un aceleramiento de los procesos de la Justicia, de los procesos penales. En fin, para lograr una serie de beneficios que apuntaban a mejorar el servicio de justicia.

En aquel entonces, yo había presentado un proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que fue redactado por el doctor Julio Federik, quien había tenido una enorme importancia en el Código Procesal Penal que regía en nuestra provincia. Y al poco tiempo de esto, el Poder Ejecutivo de nuestro gobierno de aquel entonces envió al Senado un proyecto de ley de reforma integral del Código Procesal Penal. A partir de ahí, realizamos una tarea de debate muy importante en la comisión, donde debemos haber recibido a más de cuarenta expositores, entre ellos a reconocidos juristas, jueces, fiscales, jueces de provincia, miembros de superiores tribunales de las provincias donde regía el código procesal penal nuevo, entidades jurídicas, distintas ONG, al Ministerio Público Fiscal, obviamente al Ministerio Público de la Defensa y, también, al Ministerio de Justicia, entre otros.

Finalmente, aprobamos el nuevo Código Procesal Penal el 19 de noviembre de ese mismo año.

Luego, la Cámara de Diputados hizo lo propio y el nuevo código se transformó en la ley 27.063, que hoy estamos tratando aquí, con la intención de introducirle modificaciones.

Si bien, como lo decía la ley, el nuevo Código Procesal Penal debía comenzar a ser implementado en 2016, el Poder Ejecutivo consideró que los plazos no iban a poder ser cumplidos y en diciembre de 2015 el nuevo gobierno, con un DNU, suspendió su entrada en vigencia y estableció que sería la Comisión Bicameral de Implementación y Monitoreo del Código Procesal Penal de la Nación la que establecería un cronograma de implementación progresiva de dicho código.

Pero, ¿qué ocurrió en este tiempo?

En 2016 y en 2017 fueron sancionadas distintas leyes, que fueron tratadas obviamente en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

13 APÉNDICE

I

CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Ciudad de Buenos Aires, abril de 2018.

A la señora presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.

Presente.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 19 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, la realización de un sesión especial el día miércoles 25 de abril del corriente año a las 11 horas para dar tratamiento a los siguientes puntos:

1. O.D. N° 16/18: Proyecto de ley venido en revisión por el que se acepta la cesión de la jurisdicción efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional para la creación del Parque Nacional Aconquija. (C.D.-68/17.)

2. O.D. N° 33/18: Proyecto de ley venido en revisión por el que se establece un Régimen de Subrogancias para la Justicia Nacional y Federal. (C.D.-69/17.)

3. O.D. N° 35/18: Proyecto de ley de los señores senadores Urtubey y Guastavino por el que se modifica el Código Procesal Penal de la Nación. (S.-18/18.)

4. O.D. N° 36/18: Proyecto de ley del señor senador Urtubey y otros sobre intervención de comunicaciones y cadena de custodia. (S.-979/18.)

5. O.D. N° 76/18: Proyecto de ley de la señora senadora Elías de Perez y del señor senador Catalán Magni y otros señores senadores por el que se regula la actividad comercial del vuelo libre, efectuado con parapentes y/o aladeltas. (S.-4.966/17.)

6. O.D. N° 82/18: Proyecto de ley de la senadora Blas, por el que se declara a la rodocrosita piedra nacional argentina. (S.-1.560/17.)

7. O.D. N° 96/18: Proyecto de ley de los señores senadores Rozas y Pinedo, por el que se dispone la emisión de un sello postal conmemorativo del centenario de la Reforma Universitaria de 1918. (S.-4.934/17.)

8. O.D. N° 97/18: Proyecto de ley del señor senador Pereyra, por el que se instituye al 2019 como año del centenario de la creación de la Organización Internacional del Trabajo. (S.-523/18.)

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.

Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Humberto L. A. Schiavoni. – Luis P. Naidenoff. – Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay. – Silvia B. Elías de Perez.

Buenos Aires, 23 de abril de 2018.

VISTO:

La solicitud formulada por varios señores senadores para que se convoque a sesión pública especial, y

CONSIDERANDO:

Que dicho pedido se encuadra en las disposiciones reglamentarias en vigencia,

Por ello,

La presidente del Honorable Senado de la Nación

DECRETA:

Artículo 1° – Por Secretaría cítese a los señores senadores para celebrar sesión pública especial, el día miércoles 25 de abril del corriente, a las 11 horas, a efectos de:

– Cumplimentar el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado para dar cuenta a los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdos.

Y asimismo, considerar los siguientes temas:

– Proyecto de ley venido en revisión, por el que se acepta la cesión de la jurisdicción efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional para la creación del Parque Nacional Aconquija. (C.D.- 68/17 O.D. N° 16/18.)

– Proyecto de ley venido en revisión, por el que se establece un Régimen de Subrogancia para la Justicia Nacional y Federal. (C.D.-69/17 y O.D. N° 33/18.)

– Proyecto de ley de los señores senadores Urtubey y Guastavino, por el que se modifica el Código Procesal Penal de la Nación. (S.-18/18 - O.D. N° 35/18.)

– Proyecto de ley del señor senador Urtubey y otros sobre intervención de comunicaciones y cadena de custodia. (S.-979/18 - O.D. N° 36/18 con complemento.)

– Proyecto de ley de la señora senadora Elías de Perez y del señor senador Catalán Magni y otros señores senadores por el que se regula la actividad deportiva comercial del vuelo libre, efectuado con parapentes y/o aladeltas. (S.-4.966/17 - O.D. N° 76 /18.)

– Proyecto de ley de la señora senadora Blas, por el que se declara a la rodocrosita piedra nacional argentina. (S.-1.560/17 - O.D. N° 82/18.)

– Proyecto de ley de los señores senadores Rozas y Pinedo, por el que se dispone la emisión de un sello postal conmemorativo del centenario de la Reforma Universitaria de 1918. (S.-4.934/17 - O.D. N° 96/18.)

– Proyecto de ley del señor senador Pereyra, por el que se instituye al 2019 como año del centenario de la creación de la Organización Internacional del Trabajo. (S.-523/18 - O.D. N° 97/18.)

Art. 2º – Comuníquese.

GABRIELA MICHETTI.

Juan P. Tunessi.

Buenos Aires, 23 abril de 2018.

A la señora presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle ampliar el temario de la sesión especial, incorporando la O.D. N° 100/18, expediente 2.592/17, por el cual se encomienda al Banco Central la acuñación y puesta en circulación de una moneda de curso legal vigente de diez pesos.

Saludo a usted con distinguida consideración.

*Daniel A. Lovera. – José M. Á. Mayans. –
Guillermo E. M. Snopek. – María T. M.
González. – Dalmacio E. Mera.*

Buenos Aires, 24 de abril de 2018.

VISTO:

El DPP.-63/18 de fecha 23 de abril del corriente, por el que se convoca a sesión pública especial para el día miércoles 25 de este mes, y

CONSIDERANDO:

Las facultades otorgadas oportunamente a esta Presidencia, y la solicitud formulada por varios señores senadores para que se amplíe el temario de la mencionada sesión,

Por ello,

La presidente del Honorable Senado de la Nación

DECRETA:

Artículo 1º – Ampliase el temario de la sesión pública especial convocada para el día miércoles 25 de abril del corriente, a las 11 horas, en la cual se solicita la consideración del proyecto de ley del señor senador Lovera y otros, por el que se encomienda al Banco Central de la República Argentina, la acuñación y puesta en circulación de una moneda de curso legal vigente de diez pesos (S.-2.592/17 - O.D. N° 100/18.)

Art. 2º – Comuníquese.

GABRIELA MICHETTI.

Juan P. Tunessi.

II

ACTAS DE VOTACIÓN*

Proyecto: ORDEN DEL DÍA 33/18**Descripción:** SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR**Tipo Quorum:** MAS 1/2 MC**Fecha:** 25/04/2018 13:06:38**Acta :** 1**Mayoría:** MAS 1/2**LEGISLADORES PRESENTES****Miembros del cuerpo:** 72**Votación:** NOMINAL**Presidente:** MICHETTI, Gabriela**Presentes:** 61 **Ausentes:** 11 **AMN:** 31
Afirmativos: 61
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Aguilar, Eduardo Alberto	SI	53	37. Lovera, Daniel Anibal	SI	5
2. Almirón, Ana Claudia	SI	57	38. Luenzo, Alfredo Héctor	AUSENTE	
3. Alperovich, José Jorge	AUSENTE		39. Marino, Juan Carlos	AUSENTE	
4. Basualdo, Roberto Gustavo	SI	64	40. Martínez, Ernesto Félix	SI	68
5. Blas, Ines I.	SI	11	41. Martínez, Julio	SI	44
6. Boyadjian, Miriam Ruth	SI	70	42. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
7. Brailard Pocard, Pedro	SI	67	43. Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
8. Brizuela y Doria, Ines	SI	43	44. Mera, Dalmacio	SI	17
9. Bullrich, Esteban	SI	26	45. Mirkin, Beatriz Graciela	SI	32
10. Caserio, Carlos Alberto	SI	30	46. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
11. Castillo, Oscar Anibal	SI	8	47. Odarda, María Magdalena	SI	71
12. Catalán Magni, Julio César	SI	52	48. Ojeda, José Anatolio	SI	34
13. Catalfamo, Eugenia	SI	39	49. Pais, Juan Mario	SI	33
14. Closs, Maurice	SI	9	50. Pereyra, Guillermo Juan	SI	62
15. Cobos, Julio	SI	23	51. Perotti, Omar Angel	SI	27
16. Costa, Eduardo	AUSENTE		52. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	21
17. Crexell, Carmen Lucila	SI	63	53. Pichetto, Miguel Ángel	SI	14
18. De Angeli, Alfredo Luis	SI	69	54. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	58
19. Durango, Norma Haydee	AUSENTE		55. Pinedo, Federico	SI	6
20. Elías de Perez, Silvia Beatriz	SI	42	56. Poggi, Claudio	SI	25
21. Espinola, Carlos Mauricio	SI	31	57. Porcel de Riccobelli, Blanca	SI	50
22. Fernández de Kirchner, Cristina	SI	37	58. Reutemann, Carlos Alberto	SI	61
23. Fernández Sagasti, Anabel	SI	35	59. Rodríguez Machado, Laura Elena	SI	7
24. Fiad, Mario R.	SI	24	60. Rodríguez Saá, Adolfo	SI	38
25. Fiore Viñuales, María C. del Valle	SI	40	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Fuentes, Marcelo Jorge	SI	36	62. Rozas, Ángel	SI	22
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sacnun, María de los Angeles	SI	59
28. Giacoppo, Silvia del Rosario	AUSENTE		64. Schiavoni, Humberto	SI	48
29. González, Gladys	SI	47	65. Snopek, Guillermo	SI	2
30. González, María Teresa Margarita	SI	18	66. Solanas, Fernando Ezequiel	AUSENTE	
31. González, Nancy Susana	SI	60	67. Solari Quintana, Magdalena	SI	10
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel	SI	13	68. Tapia, María Bélen	SI	65
33. Ianni, Ana María	SI	56	69. Uñac, José Rubén.	AUSENTE	
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa	SI	49	70. Urtubey, Rodolfo Julio	SI	15
35. Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	12	71. Varela, Marta	SI	66
36. López Valverde, Cristina	SI	54	72. Verasay, Pamela	SI	45

* Material suministrado por la Prosecretaría Parlamentaria del Honorable Senado.

Fiscal del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación para ejercer sus funciones ante los tribunales y juzgados inferiores, siendo el superior de los fiscales actuantes en la provincia. Se le asigna autonomía funcional y administrativa.

Se designó al frente de este Ministerio Público de la Acusación al denominado fiscal general de la acusación, resultando su designación inconstitucional, tal como se detalla a continuación.

En efecto, dicha designación contradice la disposición expresa del artículo 155 de la Constitución Provincial, que establece en su inciso 2: “Un fiscal general ejercerá el ministerio público ante el Superior Tribunal de Justicia”. En el cargo se había designado hace años a un responsable, quien hasta el presente continúa revistiendo dicho cargo constitucional, pero con funciones sumamente limitadas en tanto el nuevo funcionario ejerce la mayor parte de las funciones correspondientes, pese a la norma constitucional vigente.

Por su parte, el artículo 157 de la Constitución Provincial regula lo atinente al Ministerio Público y regula su integración y modo de ejercicio de las funciones, no previendo la creación de otro cargo como el sancionado por la ley provincial, que creó el fiscal general de la acusación. La Constitución Provincial prevé sólo el del fiscal general establecido en el inciso 2 de su artículo 155.

En la práctica, el fiscal general constitucionalmente designado perdió sus funciones originarias, quedándose relegado a ser fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia provincial, realizando sus dictámenes, que no son vinculantes. Como contrapartida, se le asignaron al nuevo fiscal general de la acusación todas las funciones que originariamente aquel otro tenía, dependiendo del nuevo funcionario todo el Ministerio Público.

Para concluir: con estas dos acciones conjuntamente tomadas el mismo día 17 de diciembre de 2015 (la de la ampliación de los miembros del Superior Tribunal y la creación del cargo de fiscal general de la acusación no previsto en la Constitución), el Poder Ejecutivo provincial tiene la posibilidad del control político de ambas instituciones del Poder Judicial, constituyendo un claro avance de un poder sobre otro. Es fácil observar la contradicción existente con la Constitución Provincial y la afectación de la división de poderes que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno y, por tanto, de la democracia.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SNOPEK

Régimen de subrogancias para la justicia nacional y federal y que deroga la ley 27.145. (O.D. N° 33/18.)

Señora presidente:

Respecto del Orden del Día N° 33/18 (proyecto de ley en revisión sobre régimen de subrogancias para la

justicia nacional y federal que deroga la ley 27.145), vengo a expresar lo siguiente.

Se trata de un proyecto que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2017 (expediente C.D.-69/17) referido a la subrogación en el ámbito del Poder Judicial, instituto que consiste en el reemplazo de un juez de un tribunal inferior a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por otro juez debido a una causal temporal que le impide al primero el ejercicio de su cargo.

La ley que regía esta clase de situaciones es la 27.145, sancionada por el Congreso Nacional el 10/6/2015, pero el 4/11/2015, en la causa “Uriarte”, la Corte Suprema nacional, por unanimidad, declaró la inconstitucionalidad del régimen de subrogancias establecido por la ley 27.145 porque afectaba la independencia judicial y la garantía del juez natural para los ciudadanos, en tanto permitía al Consejo de la Magistratura elegir subrogantes para un tribunal o caso determinado, en forma discrecional, sin sorteo ni parámetro objetivo alguno y sin dar prioridad a los jueces designados mediante el procedimiento constitucional. Además, esa ley establecía que los jueces subrogantes podían nombrarse por una mayoría inferior a la requerida para nombrar jueces titulares (mayoría absoluta en lugar de los dos tercios que exigía el texto original de la ley 24.937, del Consejo de la Magistratura).

Asimismo, en el fallo citado se declaró la invalidez de todas las listas de conjuces aprobadas sin la debida intervención del Consejo de la Magistratura con las mayorías agravadas de dos tercios. Por último, la Corte Suprema nacional estableció un procedimiento de designación de subrogancias hasta tanto el Congreso sancionara una nueva ley. Y en dicho procedimiento de designación de subrogantes fijó los lineamientos sobre los cuales se ha elaborado este texto que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y, con posterioridad, dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de este Honorable Senado de la Nación, sin merecer objeciones.

Por lo tanto, el proyecto que estamos tratando establece un nuevo régimen de subrogancias, acorde a los hechos y actos jurídicos descritos y expuestos anteriormente, derogándose formalmente la ley 27.145. En virtud de ello, considero que se produce un avance sustancial en la materia. Entre lo principal, se modifica quiénes podrán ser los subrogantes en los respectivos tribunales y, también, definiendo la subrogancia, se establece que es un régimen de integración transitoria de los tribunales inferiores de la Nación, que abarca las diferentes situaciones: licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de los jueces titulares.

El artículo 8° del proyecto en tratamiento, en lugar de recurrir a los secretarios judiciales y a los abogados de la matrícula –como lo hace aún el texto declarado inconstitucional de la ley 27.145 en su artículo 3°, tan cuestionado–, establece que la lista de conjuces se integrará con postulantes que hubieran aprobado un concurso en los últimos tres años y que hubiesen

obtenido más del cincuenta por ciento de puntuación en la instancia de oposición.

Finalmente, el proyecto establece que las listas de conjuces se aprobarán por el plenario del Consejo de la Magistratura por los dos tercios de sus miembros presentes, para ser luego remitidas al Poder Ejecutivo nacional, quien, de entre ellos y con acuerdo del Senado, designará entre diez y treinta conjuces por cada cámara nacional o federal.

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BLAS

Declaración de la rodocrosita como piedra nacional argentina. (O. D. N° 82/18)

Señora presidente:

El presente proyecto de ley, que es de mi autoría, declara a la rodocrosita como piedra nacional de la Argentina, lo que significa poner en valor esta piedra semipreciosa, llamada también “rosa del inca”.

Con ella estamos dando identidad y valor a una cultura extractiva milenaria que, con el tiempo, fue transformando su estado natural en piezas decorativas y de joyería talladas y pulidas por nuestros artesanos.

La rodocrosita no abunda en el mundo, sólo se la encuentra en pocos países, siendo el yacimiento de Minas Capillitas, ubicado en el departamento de Andalgalá, en mi provincia, el más grande de Latinoamérica.

La rodocrosita es sinónimo de gemología argentina y se trata de una piedra bien cotizada en el mundo.

En grandes cantidades, la rodocrosita es un mineral industrial que se explota para uso y aprovechamiento de manganeso, con fuerte incidencia en la industria siderúrgica.

Todo este tiempo se considera a la rodocrosita como la piedra nacional argentina, pero no existe ninguna declaración del Poder Ejecutivo ni ley de este Congreso que le otorgue esa entidad.

Quizás ésta sea la oportunidad propicia para que se legalice la declaratoria de piedra nacional.

Por lo expuesto, adelanto mi voto positivo a un proyecto que nos identifica a los catamarqueños con una piedra que es emblema de nuestra provincia y del país.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BLAS

Cesión de la jurisdicción efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional para la creación del Parque Nacional Aconquija (O. D. N° 16/18)

Señora presidente:

En relación a la creación del Parque Nacional Aconquija y dada la vinculación con el anexo 3 del proyecto

venido en revisión con la obra del Potrero del Clavillo, para conocimiento de los señores senadores les transmito que las provincias de Catamarca y de Tucumán y el Ministerio del Interior, Obras públicas y Vivienda han desarrollado un proyecto de gran envergadura denominado Complejo Hídrico Multipropósito de los Ríos Las Cañas-Gastona-Medina, cuya finalidad principal es la de lograr el eficiente aprovechamiento del recurso hídrico y el potencial natural de ambas provincias, lo que brindará la posibilidad de materializar una fuente genuina de energía limpia en un punto intermedio y próximo a una línea existente de alta tensión que une Villa Quinteros con el oeste de Catamarca. La obra permitirá descomprimir la demanda a las usinas térmicas de la provincia de Tucumán y la utilización de remanente de energía pico para salvar las demandas del sistema interconectado nacional.

La construcción de este complejo hará posible mitigar los efectos de inundaciones en Tucumán al disminuir los caudales transportados por estos ríos, favorecerá la actividad turística y facilitará la garantía de agua para el abastecimiento humano, lo que en su conjunto potenciará las economías regionales y mejorará la comunicación vial, particularmente el transporte de carga.

A título descriptivo, la obra contempla la ejecución de cuatro componentes:

- Presa y embalse Potrero del Clavillo, con emplazamiento en la localidad de Aconquija, en Yunka Suma, Valle Hermoso, departamento Andalgalá de nuestra provincia.

- Presa y embalse El Naranjal, obra complementaria ubicada en la provincia de Tucumán.

- Obras viales con nuevo trazado de acceso a Potrero del Clavillo, así como reconstrucción de las existentes.

Adelanto mi voto positivo y celebro la iniciativa de la creación de un parque nacional en su provincia, habiendo acordado las pertinentes modificaciones para que no se vean afectadas las obras ut supra mencionadas.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA CREXELL

Régimen de subrogancias para la justicia nacional y federal (O. D. N° 33/18)

Señora presidente:

I. Introducción

El proyecto en tratamiento corresponde al expediente C.D.-69/17, que tiene como antecedente el 26-P.E.-16 ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación con el mensaje 96/16 del Poder Ejecutivo nacional.

Si bien la normativa aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación, ahora en revisión, sigue los lineamientos del referido proyecto presentado por el

Poder Ejecutivo nacional, se ha tenido en consideración en ocasión de su aprobación por dicha Cámara otros proyectos de ley presentados por los señores diputados Mestre, R. Pérez y D'Agostino.

Se trata de una normativa para establecer un régimen de subrogancias para la justicia nacional y federal, que deroga la ley 27.145 actualmente vigente regulatoria de esa materia.

Al respecto, corresponde señalar que en el año 2015 presenté un proyecto que establece un régimen de subrogancias para jueces, que tramitó en el S.-4.253/15, luego reproducido en el S.-156/17.

Este último tuvo giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en primer lugar, y, en segundo lugar, a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Por tal motivo he solicitado su incorporación en los antecedentes del Orden del Día N° 33/18, en el que obra el dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que establece un régimen de subrogancias para la justicia nacional y federal (el ya citado C.D.-69/17).

II. Normas antecedentes y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

II.1. Como antecedentes vinculados al proyecto ahora en tratamiento interesa hacer mención a las últimas regulaciones existentes relativas a la subrogancia de jueces en el orden nacional, como así también a precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de esas normativas e impuso en definitiva al Congreso Nacional la necesidad de sancionar un nuevo régimen que se adecue a los principios por aquella fijados, en función de su adecuación a la Constitución Nacional.

Al respecto se debe destacar que nuestro máximo tribunal ha dictado en el último tiempo varios fallos en casos en los que se ha cuestionado la normativa vigente en materia de subrogación de jueces en el orden nacional y federal.

Sin perjuicio de la referencia específica que se hará seguidamente a esos precedentes, cabe adelantar que deben mencionarse y tenerse en cuenta los recaídos en los siguientes casos: “Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación”, del 23/5/2007;¹ “Rizzo, Jorge Gabriel (apod. lista 3 Gente de Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional Ley 26.855 s/ medida cautelar”, del 18/6/2013;² “Aparicio, Ana Beatriz y otros c/ EN-CSJN-Consejo de la Magistratura-art. 110 s/ empleo público”, del 21/4/2015;³ y “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/Consejo de la Magistratura de la Nación s/acción mere declarativa de inconstitucionalidad”, del 4/11/2015.⁴

La sucesión de los mencionados precedentes fue fijando un camino para establecer las condiciones necesarias que debe reunir un régimen de subrogancias en el orden nacional y federal que se impone sancionar, quedando ello en particular sintetizado en el citado caso “Uriarte”, todo para obtener una específica adecuación de ese régimen a la Constitución Nacional.

II.2. En lo que hace a la normativa que fue objeto de análisis y decisión en los referidos precedentes, por un lado se debe señalar que la ley 25.876 incorporó como inciso 15 al artículo 7° de la ley 24.937 y sus modificatorias, como facultad del Consejo de la Magistratura, la de dictar los reglamentos que establezcan el procedimiento y los requisitos para la designación de jueces subrogantes, en los casos de licencia o suspensión de su titular y transitorios en los casos de vacancia para los tribunales inferiores.

A partir de ello se dictó la resolución 76 del Consejo de la Magistratura, del 18 de marzo de 2004, que fue objeto de diversos planteos judiciales impugnatorios hasta expedirse la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Rosza”.

Todo ello motivó la sanción de la ley 26.372, que específicamente estableció que los jueces subrogantes podrían serlo siempre que hayan sido designados de acuerdo con el procedimiento previsto por la Constitución Nacional, disposición que también estableció la ley 26.376, actualmente ambas derogadas por el artículo 9° de la ley 27.145.

Esta última ley es la que se encuentra actualmente vigente. Ahora bien, a pesar de que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el Congreso de la Nación en ese entonces fijaron como pauta rectora de las subrogancias que dichos jueces sean designados de conformidad con el mecanismo dispuesto por la Constitución Nacional, la ley 27.145 estableció un régimen que, a la postre, resultó declarado inconstitucional por el máximo tribunal (en la citada causa “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”).

El referido régimen declarado inconstitucional dejaba al arbitrio del Consejo de la Magistratura la posibilidad de cubrir cargos vacantes y completarlos con subrogantes designados por fuera de los mecanismos constitucionales.

El fallo “Uriarte” declara la inconstitucionalidad de la ley 27.145, que establece el régimen de subrogación de jueces de tribunales inferiores a la Corte Suprema. En dicha ocasión la Corte dejó sentado que el subrogante, si bien de modo temporal, tiene a su cargo la administración de la Justicia, por lo que deben respetarse los requisitos previstos por la Constitución Nacional y tratados respecto a la independencia, idoneidad e inamovilidad del juez, a la necesaria intervención del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación en su nombramiento y a las mayorías calificadas del Consejo de la Magistratura. Sostuvo

1 Fallos, 330:2361.

2 Fallos, 336:760.

3 Fallos, 338:284.

4 Fallos, 338:1216.

también que la elección de subrogante debe realizarse según parámetros objetivos, por plazo cierto y determinado, dado que se trata de un régimen de excepción y no puede prolongarse indefinidamente, debiendo dar prioridad en la elección del subrogante a aquel que haya sido designado juez según el procedimiento previsto por la Constitución.

II.3. En efecto, según lo manifestado por el Supremo Tribunal en el caso “Uriarte”, la ley 27.145 resulta inconstitucional por considerarse violatoria de los principios y garantías constitucionales y convencionales relativos, entre otros, al debido proceso y al derecho de toda persona de ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, nombrado conforme a la Constitución Nacional.¹

Según consigna la Corte, lo establecido por la ley permitía que, en forma paralela a los jueces designados de acuerdo con las reglas de la Constitución Nacional, se conformara un cuerpo de conjuces por cada fuero, instancia y jurisdicción y cuyo nombramiento para un tribunal o incluso para un caso concreto, era definido en forma discrecional y por simple mayoría por el Consejo de la Magistratura, al margen del procedimiento constitucional, creando una justicia de excepción en la que no regía la garantía del juez natural ni de independencia judicial.²

En orden al resguardo de las garantías constitucionales, la Corte indica que el principio esencial tiene que ser el de que el ciudadano que tiene la facultad de juzgar a otro ciudadano haya sido investido como magistrado según el procedimiento previsto por la Constitución Nacional, la cual indica la necesaria intervención del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Honorable Senado de la Nación, además del paso previo por el concurso, en el que el candidato haya tenido que demostrar sus condiciones y aptitud para el ejercicio del cargo.

Cabe detenerse en la importancia de la necesidad del “acuerdo del Senado” como requisito para la designación del candidato a juez. En efecto, según dice el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,³ el

1 Cfr. Constitución Nacional, artículos 18 y 75, inciso 22. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 26; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8.1; Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 10.

2 Cfr. “Uriarte”, considerando 32.

3 Constitución Nacional, artículo 99: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] 4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto. Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el

Senado debe prestar acuerdo “en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”. A través de este mecanismo se adquiere la calidad de juez. Tal sistema de designación encierra, en el marco de un sistema republicano federal, la búsqueda de un imprescindible equilibrio político, ya que, como dijo la Corte en la causa “Rosza”, constituye “un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial”, a la vez que implica la garantía de obtención de las designaciones mejor logradas.⁴

Con ello se pretende que el designado como juez cumpla con los requisitos de idoneidad, imparcialidad y objetividad necesarias para poder juzgar conforme a derecho.

II.4. Es de destacar que “el principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en las que se decida sobre los derechos de la persona”.⁵ Es por esto que, tal como señala la Corte: “Es el Estado quien debe garantizar una apariencia de independencia de la magistratura

cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.

4 CSJN, fallo “Rosza”, considerando 11: “Tal sistema de designación encierra la búsqueda de un imprescindible equilibrio político pues, tal como lo ha enfatizado muy calificada doctrina –en términos verdaderamente actuales aunque referidos al texto constitucional anterior a la reforma de 1994–, el acuerdo del Senado constituye “un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial...”, pero también entraña el propósito de obtener las designaciones mejor logradas: “el Senado –enseña Estrada– presta o no su acuerdo, según reconozca en la persona propuesta las cualidades y méritos requeridos para el fiel desempeño de las difíciles cuestiones que llamado a resolver” (conf. Estrada, José Manuel, *Curso de derecho constitucional*, Buenos Aires, 1927, pág. 302 quien cita la opinión de Hamilton, Alexander, en *El Federalista* 76). Más todavía, resulta indudable que la participación del Senado ha sido enfáticamente reclamada por nuestros constituyentes, ni bien se atiende al informe de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal que, al fundar la propuesta de reforma al texto sancionado en 1853, expresó: “todas las Constituciones, y muy especialmente las federales, han buscado un correctivo a la facultad peligrosa y corruptora depositada en manos de un solo hombre, de distribuir empleos honoríficos y lucrativos de un orden elevado. De aquí la necesidad de sujetar a un acuerdo previo el nombramiento de los ministros, diplomáticos, los obispos, los altos empleos de la milicia, y jueces superiores, sometiendo al Senado la facultad de prestar ese acuerdo...” (Ravignani, Emilio, *Asambleas constituyentes argentinas*, Buenos Aires, 1937, tomo IV, pág. 780).

5 “Uriarte”, considerando 8º. Cfr. también caso “Aparicio”.

que inspire legitimidad y confianza suficiente no solo al justiciable, sino a los ciudadanos”.¹

Es en orden a resguardar la independencia judicial² que la Constitución Nacional establece requisitos especiales en cuanto a un adecuado proceso de nombramiento de los jueces y a su estabilidad e inamovilidad en el cargo³, lo cual tiene relación directa con la garantía constitucional del “juez natural” y la terminante prohibición de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales o sacados de los jueces legítimamente nombrados de acuerdo a la Constitución Nacional.⁴

Por otro lado, la reforma constitucional de 1994, al establecer la creación del Consejo de la Magistratura, lejos de darle a este instituto la potestad absoluta y discrecional respecto de la designación y nombramiento de los jueces, lo que hizo fue “elevar el umbral de garantía de independencia judicial”⁵, en lo relativo a las exigencias requeridas para el nombramiento de los jueces.

Asimismo, respecto de la intervención de este Consejo en la designación de los jueces, la Corte señala la importancia de las mayorías calificadas como garantía de transparencia⁶ en un asunto de tal envergadura institucional, por lo que considera que es violatorio de la imparcialidad la mayoría simple exigida por la ley 27.145.

II.5. Cabe resaltar lo mencionado por la Corte respecto de la excepcionalidad del régimen de subrogación. Como lo señalé anteriormente, justamente por la importancia que implica que un ciudadano posea la facultad de juzgar a otro ciudadano, es que la Cons-

titución Nacional refuerza las garantías y exigencias respecto del proceso de nombramiento de los jueces y su inamovilidad en el cargo. Es por ello que la regla general debe ser el nombramiento de los jueces de acuerdo al sistema previsto por la Constitución. La subrogación, que sólo tiene como justificación legal el evitar la ausencia o demora de la Justicia, de modo de no afectar el derecho de las personas de contar con un juez o tribunal que atienda en tiempo oportuno sus reclamos, no puede ser sino una excepción, la cual, como toda excepción, debe ser justificada, con plazo de duración breve y acotado y sólo debe ser utilizada cuando realmente es necesario, agotadas las otras posibilidades. Lamentablemente, tal como se puede observar y así lo señala también la Corte en el caso “Rosza” y de modo más acentuado en “Uriarte”, actualmente “la regla es la excepción y la excepción es la regla”. Hoy la regla es designar un subrogante y la excepción es nombrar a un juez mediante un concurso siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución.

Asimismo, dentro de la excepcionalidad que implica en sí misma la subrogación, dadas las sustanciales diferencias que existen entre los jueces y aquellas personas que no lo son,⁷ es importante remarcar la preeminencia que tiene que tener, a la hora de llenar una vacante temporal, aquel que es magistrado, elegido como tal según lo previsto por la Constitución, sobre aquel que no lo es, aunque sea elegido entre la lista de conjuces, la cual requiere siempre para su validez la previa intervención del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Honorable Senado de la Nación. En este sentido, la ley 27.145 preveía la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura pudiera realizar una lista de conjuces o nombrar un subrogante de forma libre, discrecional e indistinta entre un juez y un integrante de la lista de conjuces, sin la intervención de los otros dos poderes mencionados como esenciales por la Constitución y por la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional y de la Corte Interamericana.

II.6. También respecto del procedimiento mismo de elección del subrogante, la Corte insiste en su objetividad e imparcialidad, de modo de garantizar al ciudadano la justicia y el debido proceso. En este sentido, el procedimiento de elección de un subrogante que, pese a ser provisorio, pasa a desempeñar las mismas funciones que el juez titular, esto es, administrar justicia, debe evitar todo tipo de posible discrecionalidad o arbitrariedad –o apariencia de tal– por parte de quien tiene a su cargo la designación y nombramiento del mismo. En efecto, como han remarcado en reiteradas oportunidades tanto la Corte Suprema nacional como la Corte Interamericana, “los justiciables tienen el derecho que surge de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales a que los jueces que resuelvan sus controversias, aunque provisorios, sean y aparenten

1 “Uriarte”, considerando 9º; “Aparicio”, considerando 18.

2 Cfr. “Uriarte”, considerando 16. Los jueces gozan de la garantía de estabilidad y permanencia como forma de asegurar su independencia (*Fallos*: 314:881 y 749, 315:2.386, 324:1.177 y 325:3.514). La importancia de la inmovilidad para el correcto ejercicio de su función ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas (caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”. Sentencia del 31 de enero de 2001. Serie C Nº 71, párrafo 75, caso “Paamara Iribarne vs. Chile”. Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C Nº 135, párrafo 156, y caso “Aptiz Barbera” cit. párrafo 138, entre otros e informe A/HRC/11/11 del 24 de marzo de 2009, pto. 57.

3 “Uriarte”, considerando 10. Cfr. *Fallos*: 314:881 y 749; 315:2.386; 324:1.177; 325:3.514 y causa “Aparicio” y sus citas.

4 Cfr. Constitución Nacional, artículo 18. Fallo “Uriarte”, considerando 10. *Fallos*: 330: 2361 y causa “Aparicio”.

5 “Uriarte”, considerando 24.

6 “Uriarte”, considerando 24. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/ ser. L/V/II, Doc. 44, 5-12-2013, pto. 93: “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en la Américas”.

7 Cfr. “Uriarte”, considerando 15; “Aparicio”, considerando 24.

ser, independientes”, por lo que “la provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen desempeño del juzgador y la salvaguarda de los propios justiciables. De aquí se sigue que, aunque los jueces titulares y los subrogantes son designados de manera diferente y tienen un grado distinto de estabilidad, el Estado debe garantizar un procedimiento para el nombramiento de estos últimos sobre la base de parámetros básicos de objetividad y razonabilidad que aseguren el ejercicio independiente de su cargo”.¹

Respecto de este aspecto, la Corte declara inconstitucional lo previsto por la ley 27.145 en tanto no preveía parámetros objetivos a los cuales debía someterse el Consejo de la Magistratura para nombrar un juez subrogante.²

La Corte Suprema sentó también que corresponde establecer un orden de prelación objetivo para la elección del subrogante. De este modo, producida una vacante, ésta deberá ser cubierta por magistrados de otros tribunales, que han sido designados para sus cargos conforme al procedimiento de la Constitución Nacional. Sólo excepcionalmente, en caso de haberse agotado esa posibilidad sin éxito, deberá realizarse un sorteo de entre la lista de conjuces para evitar toda sospecha de parcialidad o discrecionalidad, dejando en claro que siempre se dará preeminencia para llenar una vacante a aquel que es juez según la Constitución de aquel que no lo es.³

II.7. Como ya se señaló, se puede sostener que el precedente “Uriarte” contiene las principales pautas a seguir en el régimen de subrogancias.

Se pueden sintetizar tales pautas en los siguientes términos:

1 “Uriarte”, considerando 11. Caso “Apitz Barbera y otros -Corte Primera de lo Contencioso Administrativo- vs. Venezuela. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas”. Sentencia del 5 de agosto de 2008, párrafo 43. Caso “Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas”. Sentencia del 30 de junio de 2009, párrafo 114. Caso “Chocrón. Chocrón vs. Venezuela. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas”. Sentencia del 1º de julio de 2011, párrafo 103.

2 Cfr. “Uriarte”, considerando 22: “A este respecto, el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados recomendó ‘a los Estados miembros que establezcan un mecanismo para asignar los casos de manera objetiva. Una posibilidad podría ser la asignación por sorteo o mediante un sistema de distribución automática atendiendo a un orden alfabético. Otra posibilidad podría consistir en asignar los casos mediante planes predefinidos de gestión de los tribunales que deben incorporar criterios objetivos para dicha asignación. Estos planes deben estar suficientemente detallados para evitar manipulaciones en la asignación de casos (informe del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, 24 de marzo de 2009, párrafo 46 y 47)’”.

3 “Uriarte”, considerando 18.

i. Necesaria intervención del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación.

ii. El Consejo de la Magistratura debe actuar con mayoría calificada, no mayoría simple: mayoría absoluta del total de sus miembros.

iii. Siempre debe darse prioridad a un juez nombrado según el procedimiento establecido por la Constitución Nacional para que ocupe el cargo de subrogante.

iv. El criterio a seguir para la elección del subrogante debe ser según parámetros objetivos de modo de no dar lugar a la discrecionalidad por parte de quien tiene que elegir al subrogante ni dudas acerca de la independencia de éste.

v. El régimen de subrogancia es un régimen de excepción y por tanto, debe tener un plazo objetivo acotado que lo limite.

En el mismo fallo la Corte encargó al Poder Legislativo que sancionara un nuevo régimen de subrogación de acuerdo a las pautas establecidas en ese precedente.

Tal es la tarea en la que ahora estamos abocados con el tratamiento del proyecto aquí en consideración, resultando imperativo que se evalúe especialmente su adecuación con las pautas referidas.

III. Aspectos generales y contenido del proyecto

En función de lo dicho precedentemente, resulta de interés hacer una referencia sintética de las principales cuestiones generales y disposiciones del proyecto en tratamiento, lo cual se expone seguidamente:

– El proyecto propone establecer el modo de designación transitorio de jueces para situaciones excepcionales. Se define como subrogancia la situación de los tribunales inferiores de la Nación en caso de licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de sus jueces titulares.

– Para los casos de recusación o excusación, se establece que se aplicarán las reglas previstas en los códigos procesales aplicables a la jurisdicción territorial y al fuero de que se trate, y subsidiariamente, los términos de la ley proyectada;

– Se procura un modo de designar jueces subrogantes concordante con la Constitución Nacional, determinando que la designación no sea una facultad del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que ni la Carta Fundamental ni la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgan dicha potestad.

– En función de ello, sólo se otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de confeccionar las listas de conjuces, a partir de las cuales será el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del mencionado Senado, el que proceda a su selección conforme con la Constitución Nacional.

– Como modo de designación de los jueces subrogantes, se propone que sean las cámaras competentes las que lo hagan. Se privilegia la designación de jueces titulares, que puedan cumplir su rol de manera indepen-

diente y, subsidiariamente, cubrir mediante un modo eficaz las vacantes de manera transitoria.

– En general se contempla que las vacantes sean cubiertas por un juez de igual grado y competencia, planteándose siempre como excepción aquellos jueces que registren atrasos significativos en las causas a cargo.

– Asimismo, se fijan reglas para los casos en los cuales no es posible cubrir transitoriamente la vacante con jueces de igual grado y competencia, a través de mecanismos de designación de conjuces.

– En cuanto a la integración de las listas de conjuces a ser elevadas al Poder Ejecutivo, se establecen mecanismos para conformar aquéllas con aspirantes que ya hayan concursado para cargos de jueces, siempre que hubieran obtenido un resultado adecuado;

– Se determinan reglas objetivas para la subrogancia de las distintas cámaras federales y nacionales de apelaciones, así como en lo atinente a la Cámara Nacional Electoral con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– Como reglas específicas para la designación de subrogantes se establecen las siguientes:

1) En caso de vacancia de los jueces de primera instancia, la cámara respectiva designará un juez subrogante dentro de los tres días de ocurrida la causa que motivara la subrogancia, y de acuerdo al siguiente orden: *a)* un juez de igual competencia y de la misma jurisdicción territorial o, en su defecto, de la misma jurisdicción territorial y de competencia similar o, cuando ello no fuere posible, con un juez de la jurisdicción territorial más próxima; y *b)* un conjuce integrante de la lista confeccionada de acuerdo a lo que prevé la ley.

2) En caso de vacancia de los miembros de los tribunales orales en lo criminal federal, y de los tribunales orales en lo penal económico, la Cámara Federal de Casación Penal designará un miembro subrogante dentro de los tres días de ocurrida la causa que motivara la subrogancia, de acuerdo al siguiente orden: *a)* un miembro de un tribunal de igual competencia y de la misma jurisdicción territorial o, en su defecto, de la misma jurisdicción territorial y de competencia similar o, cuando ello no fuere posible, con un miembro de un tribunal de la jurisdicción más próxima; *b)* un conjuce integrante de la lista confeccionada de acuerdo a lo que prevé la ley.

3) En caso de vacancia de los miembros de los tribunales orales en lo criminal y de los tribunales orales de menores con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional con asiento en la misma ciudad designará un subrogante dentro de los tres días de ocurrida la causa que motivara la subrogancia, de acuerdo al siguiente orden: *a)* un miembro de un tribunal de igual competencia y de la misma jurisdicción territorial o, en su defecto, de la misma jurisdicción territorial y de competencia similar o, cuando ello no fuere posible, con un miembro de un

tribunal de la jurisdicción territorial más próxima; *b)* un conjuce integrante de la lista confeccionada de acuerdo a lo que prevé la ley.

4) Para los casos de vacancia de los miembros de las cámaras nacionales o federales, se establece que se integrarán por sorteo público a realizar por la misma cámara entre los demás miembros de cada una de ellas; de no ser posible, se prevé sorteo entre otros tribunales en cada caso detallado. Y en defecto de todo ello, con un conjuce integrante de la lista confeccionada de acuerdo a lo que prevé la ley. Esta previsión comprende a: la Cámara Federal de Casación Penal, las cámaras federales de apelaciones, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional –ambas con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– y las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y comercial federal, en lo contencioso administrativo federal, la Cámara Federal de la Seguridad Social y las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil, en lo comercial, del trabajo y en las relaciones de consumo –con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–.

5) Para los casos de vacancia de los cargos de la Cámara Nacional Electoral, ésta se integrará por sorteo público entre los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en caso de que ello no resultara posible, entre los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal;

6) Para los casos de vacancia de los miembros de los tribunales inferiores con competencia electoral, la designación será realizada por la Cámara Nacional Electoral, de un conjuce integrante de la lista confeccionada de acuerdo a lo que prevé la ley;

– Como norma supletoria a las anteriores reseñadas y para el caso que no resultare posible completar la vacancia por excusación del designado, se contempla también que las cámaras de apelaciones podrán convocar a: *a)* jueces titulares designados por el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del Honorable Senado de la Nación, que no hubiesen sido puestos en funciones por resultar integrantes de un tribunal o juzgado no habilitado y que tengan competencia material afín; *b)* magistrados jubilados en los términos del artículo 16 de la ley 24.018 y sus modificatorias que no hubieran alcanzado la edad de 75 años.

– En cuanto a las listas de conjuces, se establece que el Consejo de la Magistratura elaborará dicha lista una por cada cámara nacional o federal para actuar en la misma cámara y en todos los juzgados que de ella dependan. Podrán integrar la lista de conjuces, sin que se les requiera un nuevo concurso público de antecedentes, los postulantes que hubieran integrado ternas enviadas al Poder Ejecutivo nacional en los últimos tres años a computar desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y que hu-

biesen obtenido más del 50 por ciento de puntuación en la instancia de oposición, con la conformidad de los posibles integrantes. Las listas de conjuces deberán ser aprobadas por el plenario del Consejo de la Magistratura por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes. Una vez aprobadas serán remitidas al Poder Ejecutivo nacional, que designará de entre aquéllos, y con acuerdo del Senado, entre 10 y 30 conjuces por cada cámara nacional o federal, según la necesidad de las respectivas jurisdicciones.

– Se establece que no podrán integrar las listas de conjuces las siguientes personas: *a)* los designados magistrados titulares del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público; *b)* se encontraran suspendidos o removidos del Poder Judicial de la Nación; *c)* los alcanzados por las incompatibilidades previstas en el decreto ley 1.285/58; *d)* hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar en el orden nacional, provincial o municipal; *e)* se encontraran procesados, o su equivalente en las jurisdicciones locales, por delitos dolosos, y dicho procesamiento se encontrare firme.

– Se contempla como retribución para los jueces subrogantes, la que corresponda a la función que desarrollen. Y si se tratare de magistrados que ejercen su cargo simultáneamente con otro de igual jerarquía, se prevé un incremento consistente en la tercera parte de la retribución que corresponda a la función que subroga.

– Finalmente se contempla los jueces subrogantes permanecerán en el cargo hasta el cese de la causal que generó su designación, y que en ningún caso la subrogancia podrá exceder el plazo de un año contado desde la designación, prorrogable por igual plazo siempre que medie causa justificada, a cuyo vencimiento se producirá la caducidad de pleno derecho de aquélla.

– Una última disposición que cabe destacar establece que será nula la designación de un juez subrogante para desempeñar funciones en un juzgado o tribunal que no hubiese contado previamente con magistrados titulares designados conforme al procedimiento constitucional ordinario.

IV. Consideraciones finales

A modo de conclusión y cierre del presente se debe señalar que resulta imperioso determinar la manera en que se cubrirán las vacantes transitorias que se produzcan en el Poder Judicial de la Nación.

A ello atiende el proyecto que ahora se trata, el cual ya tiene sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.

Teniendo en cuenta el desarrollo precedente de los antecedentes citados, las pautas fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el contenido del proyecto en tratamiento más arriba reseñado, entiendo que constituye una alternativa regulatoria que se adecua

a las pautas que fijó la Corte Suprema de Justicia en el fallo “Uriarte”.

Tal adecuación debe ser especialmente considerada para evitar que sigan sucediendo fallos del máximo tribunal o de otros tribunales que declaren la inconstitucionalidad de las normativas que regulen las subrogancias para la justicia nacional y federal, toda vez que ello involucra una evidente situación de inseguridad jurídica que afecta por un lado a los justiciables que son parte en los procesos en que intervienen jueces subrogantes, como así también a la institucionalidad que se debe resguardar y procurar en la actuación en general del Poder Judicial de la Nación.

Considero que el proyecto en debate aprueba un régimen de subrogancias conforme se requiere en los precedentes reseñados. En particular, considero que las pautas de designación y duración de los subrogantes, conforme la normativa proyectada, resultan compatibles con los parámetros fijados por la Corte Suprema, estimando en ese orden y, fundamentalmente, que se aplican criterios objetivos estableciendo la prioridad de intervención de jueces designados, fijándose plazos concretos y limitados para su desempeño como subrogantes.

Asimismo, se contempla la necesaria intervención del Poder Ejecutivo y del Senado para la designación de conjuces, en su carácter de órganos que constitucionalmente tiene la exclusividad para la designación de jueces.

Previo a concluir esta intervención no quiero dejar de reiterar que presenté un proyecto de ley que tenía el mismo objeto que el que ahora estamos tratando, el cual tramitó con el expediente S.-157/17.

Si bien la regulación que propuse en ese proyecto presenta algunas diferencias con la que resulta del que ahora estamos tratando, se procuró también con esa propuesta presentar una alternativa regulatoria que se adecue a las pautas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido según lo explicado precedentemente.

Sin perjuicio de preferir en algunos aspectos las modalidades regulatorias del proyecto de mi autoría, considero en esta instancia que debe privilegiarse la necesidad de avanzar en la defensa del efectivo imperio de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales en lo que hace a la debida división de poderes, independencia e idoneidad del Poder Judicial y al propio sistema republicano federal de gobierno.

Ello impone dar cumplimiento con la necesidad de establecer por ley del Congreso de la Nación un régimen de subrogancias acorde con los principios y pautas desarrolladas, aspecto que, reitero, considero queda cumplido con el proyecto ahora en tratamiento.

Por lo demás, ese proyecto tiene ya aprobación de la Cámara de Diputados y también dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de este Honorable Senado.

En tal estado de cosas, voto en forma favorable al proyecto que se trata, procurando con ello dar el acompañamiento necesario para que en definitiva sea prontamente aprobado el régimen en cuestión, y con ello saldar requerimiento que hiciera nuestro máximo tribunal.

7

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ELÍAS DE PEREZ

**Cesión de la jurisdicción efectuada
por la provincia de Tucumán al Estado nacional
para la creación del Parque Nacional Aconquija
(O.D. N° 16/18)**

Señora presidente:

La sierra Aconquija es una región que va a convertirse en un parque nacional y reserva nacional cuya suma es de 72.000 hectáreas.

Es de una biodiversidad muy importante de proteger: tiene desde glaciares y montañas a yungas.

Es la sierra más rica de la Argentina en cuanto a número de especies vegetales –se estiman alrededor de 2.000 especies de plantas vasculares– y de gran fauna, además de su notable patrimonio cultural (La Ciudadita-Camino del Inca y la quebrada del Portugués). También es una zona de captación de agua que brinda un servicio ambiental de vital importancia, como es la regulación del flujo estacional de la cuenca Salí-Dulce.

El parque posee actualmente circuitos para recorridos en bicicleta o caminatas, lugares específicos para la práctica de senderismo, además de resultar un espacio destacable por sus características paisajísticas y la posibilidad de observación de flora y fauna. Que sea parque nacional significa calidad en la preservación ambiental.

Un parque nacional representa el nivel máximo de protección. Pero esto no significa que no puedan realizarse obras, sino que al convertirse en un establecimiento de utilidad nacional y quedar en manos del Estado nacional, bajo la Administración de Parques Nacionales, toda obra (camino, puentes, casas, hospitales, por ejemplo) va a quedar sujeta a las condiciones ambientales, a permisos y a evaluaciones previas.

El potencial de corredores turísticos es vital como generador de desarrollo.

El turismo de la naturaleza mueve en el mundo a millones de personas porque rescata y promueve diversos atractivos y escenarios en ambientes naturales. Se destaca, como una actividad económica codiciada y sustentable, promotora del desarrollo de economías regionales, motor de empleo y generador de divisas cuando los visitantes son extranjeros. Sirve también para desarrollar una sensibilidad que es clave a la hora de trabajar a favor de la conservación.

De acuerdo con el reporte sobre competitividad en viajes y turismo elaborado en 2017 por el World Eco-

nomic Forum, la Argentina ocupa el puesto 25° por su excepcional dotación de recursos naturales.

Hoy, los parques nacionales prestan servicios ambientales a la comunidad, a la vez que son atractivos turísticos de relevancia para el viajero local y para el visitante internacional.

La conservación y el uso público sustentable de los espacios se complementan favorablemente para el fomento del turismo natural activo.

El proyecto que tiene media sanción en Diputados, por unanimidad y con la firma de todos los diputados de la provincia tucumana, sin ninguna bandera política más que la de la creación del parque nacional.

La Legislatura de Tucumán sancionó dos leyes. En la primera ley cedió al Estado nacional, con la condición de la creación de un parque, y en la segunda ley, sancionada al poco tiempo, dispuso modificar algunos errores en la nomenclatura catastral, además de hacer la salvedad de la reserva de cesión ambiental en todo lo que se refiera a las obras hídricas de los ríos de Las Cañas, Gascona, Medina.

La media sanción no da cuenta de estas modificaciones y es por lo que da origen a los cambios que hacemos en esta Cámara de Senadores.

La creación de parques nacionales es una política pública del gobierno nacional. El presidente Macri volvió a mencionar en la apertura de sesiones legislativas 2018 la importancia de la protección del medio ambiente y de la riqueza natural de nuestro país.

Los parques nacionales son una herramienta de desarrollo local, y es necesario que todos tengan ese derecho.

8

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ELÍAS DE PEREZ

**Regulación de la actividad deportiva y comercial
del vuelo libre efectuado con parapentes
y/o aladeltas (O.D. N° 76/18)**

Señora presidente:

El 29 de diciembre de 2017 Natalia Vargas, joven tucumana que se había radicado en Alemania para estudiar y se encontraba de paseo por su provincia natal, decidió subir hasta Loma Bola, un centro de vuelo ubicado en San Javier, Tucumán, para realizar un viaje en parapente. Desgraciadamente, Natalia cayó al vacío desde 120 metros de altura y murió.

Me reuní con los padres de Natalia para brindarles mi apoyo. En dicha reunión me comentaron que en el vuelo que tuvo el trágico desenlace fallaron los elementos de control y que el piloto que transportaba a su hija no estaba habilitado para realizar vuelos biplaza.

Preocupada porque volviera a ocurrir otro accidente, decidí abocarme al estudio del presente tema, para lo cual me reuní con personas de la Federación Argentina